BANDERA ROJA

Nº II BARCELONA ENERO 1971

# LA LUCHA DE CLASES BAJO EL FRANQUISMO 1939-1970



# 1. LA GUERRA CIVIL Y SU DESENLACE

Al iniciar el análisis de la formación social española no debe perderse nunca de vista que todos sus elementos están marcados por el hecho decisivo de la guerra civil de 1936-39.

Contra lo que pretende una visión superficial de la misma, esta guerra no fue un simple intento de las viejas clases reaccionarias de bloquear el desarrollo de la sociedad española manteniendo intactas las viejas estructuras. Fue eso y algo más, mucho más.

Cabe decir también que la II República no fue tanto el comienzo efectivo de la revolución democrático-burguesa en España como una fase de su tortura da trayectoria secular, en la que se abrieron grandes posibilidades para la acción de las organizaciones obreras y populares.

En realidad, la II República fue una solución transitoria en un momento de equilibrio de clases, cuando el bloque dominante había perdido su principal instrumento político -- La Monarquía -- y la clase obrera no estaba todavía en condiciones de tomar el poder por la vía revolucionaria. En aquellas condiciones, la burguesía pequeña y media se encontró con el poder literalmente en las manos, pero sin fuerza propia para dar solución a los grandes problemas del país. Lo realmente nuevo es que la fluidez misma de la situación republicana permitía el libre juego de todas las fuerzas políticas y hacía aparecer a la superficie, con toda nitidez, las líneas fundamentales de la lucha de clases.

Para la clase obrera, concretamente, fue una gran ocasión para perfilar sus opciones tácticas y estratégicas y poner a punto sus instrumentos revolucionarios. Era una situación propicia para avanzar rápidamente hacia la revolución.

Para el bloque dominante, en cambio, era una situación peligrosísima que había que atajar rápidamente recurriendo a la propia legalidad republicana o, en caso de resultar ésta inviable para sus propósitos, utilizar su reserva suprema: el Ejército.

El bloque dominante conservó intactas sus posiciones económicas y sociales. Hasta la guerra civil puede decirse que los gobernantes republicanos y socialistas no modificaron la estructura de la propiedad en el campo y en la industria. La vieja oligarquía terrateniente apenas se vió afectada por la Ley de Reforma Agraria y continuó siendo la fuerza decisiva del bloque dominante. Junto a ella, la burguesía industrial y financiera, que había apoyado una primera experiencia dictatorial con Primo de Rivera y había dado serios pasos por la vía del capitalismo monopolista, veía estimulada su agresividad por la crisis económica mundial. Para esta burguesía industrial y financiera, la defensiva a que se veía temporalmente obligada por la caída de la monarquía, hacía todavía más urgente la necesidad de encontrar una solución política autoritaria que redujese al silencio a las clases populares y permitiese una rápida acumulación de capital. La burguesía industrial y financiera era, pues, el sector más agresivo del bloque dominante y no tardaría en conseguir la hegemonía dentro de él.

Las capas medias y la pequeña burguesía se hallaban divididas. En las ciudades apoyaban, por lo general, la solución republicana e incluso encontraban formas de organización política propias en las nacionalidades periféricas con los partidos nacionalistas. En Cataluña, incluso llegaron a obtener un Estatuto de autonomía. En cambio, las capas medias de la España rural estaban más subordinadas a la influencia directa del bloque dominante y en algunas zo-

nas -- como Castilla la Vieja -- llegaron a suministrar una gran masa de maniobra para los nuevos partidos del bloque dominante.

En el terreno político, el bloque dominante había perdido provisionalmente la dirección del Estado, pero conservaba sólidas posiciones en él. La alta administración, el personal diplomático, el aparato judicial seguían estando, por lo general, en las mismas manos que durante la monarquía. La Iglesia, el gran instrumento político-ideológico del bloque dominante, había perdido algunas de sus bazas institucionales pero había sabido maniobrar con habilidad. No sólo se había desembarazado del incómodo cardenal Segura sino que había sabido aprovechar hábilmente el elemental anticlericalismo de los republicanos, de los socialistas y de los anarquistas para reforzar sus posiciones entre las capas medias del campo y hasta de la ciudad.

A su vez, el Ejército, reserva fundamental del bloque dominante, mantenía casi intactas sus posiciones de fuerza. La reforma de Azaña apenas afectó a los cuadros monárquicos y fascistas. Y el bloque dominante aprovechó la primera ocasión -- la subida de Gil Robles al Ministerio de la Guerra en 1934 -- para reforzar el potencial del Ejército y situar el frente del mismo a generales jóvenes -- como Franco, Goded y otros -- dispuestos a ir hasta el final en el aplastamiento de las organizaciones obreras y populares.

Naturalmente, el bloque dominante también aprovechó la libertad republicana para reorganizar sus instrumentos de acción política, sus partidos políticos y montar incluso un movimiento de masas en la España agraria y tradicional. Nos referimos a la Confederación Española de Derechas Autónomas (C.E.D.A.) dirigida por Gil Robles. El bloque dominante comprendió que, de momento, no podía combatir con la bandera de la restauración monárquica y aceptó el juego republicano para alcanzar el poder nuevamente y destruir el movimiento obrero y popular.

Pero, al mismo tiempo, el bloque dominante tuvo en reserva otros instrumentos políticos para el caso de que fracasase -- como así ocurrió, en definitiva -- la vía parlamentaria de la C.E.D.A. Baste recordar grupos como Renovación Española, Falange Española y de las J.O.N.S., los Requetés y, sobre todo, como ya hemos dicho, el Ejército. El bloque dominante otorgó su confianza a la C.E.D.A. hasta las elecciones de febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular. Cuando comprobó que por esta vía el poder se le escapaba de las manos, retiró su confianza a la C.E.D.A. y puso la defensa de sus intereses directamente en manos del Ejército. El 18 de julio de 1936, éste inició el ataque decisivo contra la clase obrera y las masas populares.

Pues bien, si se observa el programa político de todos estos instrumentos del bloque dominante se comprueba que no pretendían únicamente restaurar el dominio político de la vieja oligarquía terrateniente sino que iban mucho más allá. Cierto que algunos sectores del bloque dominante sólo pretendían eso. Pero otros, que fueron los que acabaron prevaleciendo, afirmaban claramente su voluntad de impulsar el capitalismo monopolista y de poner el Estado al servicio de esta tarea. Recuérdese que en los 27 puntos programáticos de la Falange se hablaba incluso de reforma agraria y que Calvo Sotelo, el líder político más representativo del bloque dominante en aquel momento, ya se había señalado durante la dictadura de Primo de Rivera como el campeón del capitalismo monopolista impulsado por el Estado. Lo fundamental de este programa político era la reivindicación de un Estado fuerte, dictatorial, que centralizase las decisiones económicas, redujese a la clase obrera a la impotencia mediante la violencia más desenfrenada, y asegurase una fortísima tasa de acumulación de capital fomentando su centralización.

Para el bloque dominante la única duda residía en saber si esta tarea podría llevarla a cabo dentro del marco legal de la República, con un instru-

mento como la C.E.D.A., o si tendría que recurrir directamente a su gran reserva política: el Ejército. Su opción dependería, en definitiva, de la extensión e intensidad de la lucha de clases y, más concretamente, de la combatividad organizada de la clase obrera.

El proletariado español se encontró, al implantarse la II República, sin instrumentos revolucionarios adecuados: Sus representantes políticos eran el reformismo socialdemócrata del Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), que colaboraba con la pequeña y la media burguesía en el apuntalamiento del edificio formal de la República, o el anarco-sindicalismo de la Confederación Nacional del Trabajo y los grupos específicos de la Federación Anarquista Ibérica (C.N.T.-F.A.I.), combativos y heroicos en el enfrentamiento con la patronal pero políticamente ineficaces en la lucha por el poder del Estado.

Sin embargo, el proletariado aprendió a orientarse con mucha rapidez. Los grupos comunistas aumentaron espectacularmente en número e influencia. El Partido Comunista, que al proclamarse la República era un grupo sectario y reducido, que seguía ciegamente la línea izquierdista de "clase contra clase" bajo la dirección de Bullejos y Trilla, cambió de táctica y de grupo dirigente en 1932 con José Díaz, Dolores Ibárruri, Jesús Hernández y otros. Dentro del propio P.S.O.E. se acentuaron las tendencias revolucionarias y sus juventudes se aproximaron a las juventudes comunistas, hasta culminar en 1936 con la unificación de ambas en la Juventud Socialista Unificada (J.S.U.).

En 1934 el proletariado libró su primer gran combate frontal contra el Estado (dirigido ya por la C.E.D.A.) en Asturias. fortaleció su unidad con las Alianzas Obreras y no tardó en arrastrar a importantes sectores de la pequeña y la media burguesía a posiciones antiologárquicas y antifascistas con la formación del Frente Popular.

Como hemos visto, tras la victoria electoral de éste en febrero de 1936, el bloque dominante prescindió de la C.E.D.A. como instrumento político propio y confió directamente al Ejército la tarea de preparar el camino para el desarrollo del capitalismo monopolista.

La lucha de clases en España llegó entonces a su punto más alto. El bloque dominante, apoyado por el imperialismo mundial y, en primer lugar, por la Alemania nazi y la Italia fascista, necesitó tres largos y cruentos años para vencer la resistencia mil veces heroica del pueblo español y del proletariado en particular. En las principales ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, etc. se asistió incluso al episodio revolucionario supremo de ver al Ejército derrotado por la clase obrera, premisa indispensable de la toma del poder por ésta.

No vamos a entrar ahora en el análisis de las causas de la derrota final del proletariado. A este tema crucial dedicaremos próximamente un estudio especial, con el propósito de vincular la experiencia de entonces a los problemas presentes y futuros del movimiento obrero. Lo que interesa poner de relieve ahora es que la guerra civil se saldó con la derrota total del proletariado, con la destrucción física y política de sus cuadros e instrumentos de lucha, forjados a lo largo de un siglo de combates contra la burguesía, y con el cierre de toda perspectiva revolucionaria a corto plazo. Sin tener en cuenta esta terrible realidad es impposible comprender lo ocurrido en estos treinta años de franquismo.

Por toro lado, el desenlace de la guerra civil significó no sólo el triunfo absoluto del bloque dominante sino el predominio en él de los secto-

res más propicios al desarrollo del capitalismo monopolista. Cierto que una de las primeras preocupaciones del Estado franquista fue devolver la tierra a los propietarios expropiados durante la guerra civil. Pero lo decisivo para entender la esencia del nuevo régimen es su política de acumulación de capital sobre la base de la explotación intensiva de la clase obrera.

# 2 EL BLOQUE DOMINANTE Y EL ESTADO FRANQUISTA

## 1. LA POSTGUERRA INMEDIATA

Lo primero que hizo el bloque dominante fue, en efecto, crear un Estado dictatorial que destruyese los instrumentos políticos y sindicales del proletariado, aumentase la explotación de éste, asegurase una tasa de acumulación de capital muy elevada y fomentase el desarrollo del capitalismo monopolista. Baste recordar algunos hechos significativos:

a) Se disolvieron todos los partidos políticos (incluso los de derecha) y se confió el poder al Ejército, concentrando todas las facultades en su jefe supremo, el general Franco, que fue nombrado a la vez Jefe del Gobierno , Jefe del Estado, Jefe de todos los Ejércitos y Jefe del único partido político que se autorizó, F.E.T. y de las J.O.N.S.

b) Se disolvieron los sindicatos obreros, se prohibieron las huelgas y se creó un "sindicato" corporativo directamente inspirado en el ejemplo fascista italiano al que se denominó Sindicato Vertical, en el que se encuadraba por fuerza a los obreros junto a sus enemigos de clase, los patronos, bajo el control directo de F.E.T. y de las J.O.N.S. La misión del "sindicato" vertical era asegurar la disciplina de la clase obrera para la explotación intensiva de que iba a ser objeto.

c) Se reglamentó autoritariamente la disciplina en el trabajo y el índice de salarios. Todo aumento de salarios tenía que ser decidido por el Estado.

d) Se protegió a la empresa privada y se fomentó la concentración y la centralización del capital, mediante las leyes de protección, defensa y ordenación de la industria (Leyes de 24 de octubre y de 24 de noviembre de 1939).

e) Se puso al Estado al servicio directo de la acumulación de capital, dedicando los caudales públicos a la creación de sectores industriales que, una vez puestos en marcha, eran entregados al capital privado (tal es la finalidad del I,N.I., creado en 1941).

f) Dada la falta de otras fuentes de capital, esta acumulación se hizo exclusivamente a expensas de los trabajadores españoles, a los que se sometió a una explotación terrible. Para ello, el Estado liquidó todos los cuadros obreros (según las cifras suministradas por el historiador norteamericano Gabriel Jackson, el número de republicanos y obreros muertos en la zona franquista durante la guerra civil fue de 200.000 en cifras redondas y después de la guerra, entre 1939 y 1943, de otros 200.000. La inmensa mayoría eran cuadros políticos y sindicales y fueron ejecutados sistemáticamente por los franquistas) y persiguió con saña todo intento de reconstrucción de los sindicatos de clase y de

los partidos políticos del proletariado.

g) En el plano económico, aumentó tremendamente la tasa de plusvalía alargando la jornada real de trabajo a doce y catorce horas, reduciendo el nivel del vida mediante la contracción de los salarios y la elevación de los precios. Otro de los mecanismos utilizados fue la inflación acelerada que rebajaba constantemente el poder adquisitivo de la moneda. Tanto por la orientación nacionalista del nuevo régimen como por la situación mundial (se estaba en plena guerra) que no permitía pensar en grandes inversiones extranjeras, toda la acumulación de capital se hizo explotando a los trabajadores españoles, condenándoles al hambre.

h) Gracias a esta explotación intensiva de la clase obrera se acumularon fortunas fáciles, aumentaron las ya existentes y surgió una burguesía monopolista muy vinculada al Estado, que se dedicaba exclusivamente a forzar la explotación de los trabajadores y se preocupaba muy poco de mejorar su propia capacidad competitiva frente al capitalismo internacional.

i) También se desarrolló una enorme burocracia estatal, en parte por el aumento de las funciones del aparato estatal en el proceso de acumulación, pero en parte también por la necesidad política de contentar con cargos remuneradores a la pequeña burguesía rural que había luchado al lado de Franco durante la guerra civil.

j) Todas estas medidas, que tenían como marco general un fuerte proteccionismo aduanero y un riguroso control de cambios que eran fuente de una enorme corrupción, se bautizó con el nombre de autarquía. Por todo lo dicho, se comprende que el elemento decisivo de dicha autarquía era la explotación máxima de la clase obrera con vista a la acumulación capitalista.

En el plano político, el Estado franquista operó con instrumentos bastante simples. Una vez liquidados los partidos tradicionales, se confió el papel de partido político principal al Ejército. En un plano secundario, F.E.T. y de las J.O.N.S. (el llamado Movimiento) se encargó de controlar a la clase obrera a través de los sindicatos verticales y de suministrar cuadros para la burocracia inferior del Estado. Algunos grupos monárquicos y demócrata-cristianos colaboraron también como partidos políticos y vieron incluso realzado su papel a partir de 1945, cuando el Estado franquista quiso hacer frente al bloqueo diplomático cuidando mejor las formas exteriores, para complacer a las potencias imperialistas. No hay que olvidar, en efecto, que el bloqueo diplomático fue impuesto por la presión de la U.R.S.S. y de las fuerzas de izquierda de todo el mundo, que en aquel momento estaban en auge. Las potencias imperialistas (las llamadas potencias occidentales) querían proteger al franquismo y consiguieron convertir la presión mundial en una simple retirada de embajadores. El franquismo contribuyó a propiciar la maniobra nombrando a un demócrata cristiano (Martín Artajo) como misnitro de Asuntos Exteriores y promulgando una declaración formal de derechos (el "Fuero de los Españoles"). El pronto estallido de la guerra fría permitió a los Estados Unidos dar por terminado el bloqueo diplomático y prescindir de todos los escrúpulos "democráticos" para incluir al franquismo entre los aliados del"mundo libre".

En el plano ideológico, la justificación del Estado franquista se dejó en manos de la Falange y de la Iglesia. Entre ambos suministraron las bases ideológicas del régimen (corporativismo, nacionalismo centralista e imperialista, autoritarismo, religiosidad católica intransigente, culto al militarismo, respeto a las jerarquías tradicionales, demagogia). La Universidad, por

ejemplo, se concibió más como una fábrica de cuadros ideológico-políticos inspirados en las ideas falangistas y católicas que como un centro de formación de cuadros directivos y técnicos para el desarrollo industrial capitalista.

## 2. CRISIS DE LA AUTARQUIA Y NUEVO PERIODO DE ACUMULACION (1953-1962)

La llamada política de autarquía entró en crisis al iniciarse la década de los cincuenta por una doble razón:

1º) Porque la clase obrera, una vez pasados los efectos del primer desconcierto presentaba cada vez más resistencia a la explotación desenfrenada, aunque no había conseguido renovar sus cuadros políticos. A finales de los años cuarenta estallaron ya algunas huelgas en el País Vasco. Pero el síntoma más importante de la nueva situación fue la gran huelga de Barcelona de 1951, que paralizó la industria y la vida ciudadana durante algunos días

2º) Porque el capitalismo internacional, bajo la égida de los Estados Unidos, había entrado en plena fase de recuperación y expansión y presionaba sobre el capitalismo español haciendo cada vez más difícil una política de autarquía.

Por otro lado, la política de acumulación capitalista había producido un cierto desplazamiento en el seno del bloque dominante. La vieja oligarquía terrateniente se orientaba cada vez más a invertir sus capitales en la industria y en las finanzas. Y el crecimiento de la industria había hecho surgir una burguesía monopolista, en parte ligada a la tradicional, en parte nueva, que quería beneficiarse de la expansión del capitalismo monopolista y deshacerse de muchas de las trabas burocráticas del período de autarquía.

El Estado franquista maniobró para adecuarse a la nueva situación. Por un lado, se acercó al capitalismo internacional y abrió las puertas a la inversión del capitalismo extranjero. Recuérdese que en 1953 se firmaron los pactos con los Estados Unidos, mediante los cuales España se integraba en el mecanismo militar del imperialismo cediendo bases aéreas y navales a los norteamericanos y, por otro lado, se iniciaba el proceso de inversión de capitales norteamericanos públicos y privados en España.

Pero esta apertura al capitalismo internacional no llevó consigo ninguna modificación importante en los mecanismos políticos y económicos de la acumulación anterior. El Estado siguió funcionando como antes, los partidos políticos no variaron, la burocracia falangista siguió cumpliendo sus funciones estatales y sindicales, los sistemas de extracción y acumulación acelerada de plusvalía siguieron concebidos bajo el mismo patrón rudo y autoritario. Unicamente se intentó una leve rectificación en la política de formación de cuadros universitarios: fue la llamada liberalización del ministro Ruiz-Jiménez, que se intentó sin ninguna modificación esencial de las anteriores estructuras, como si fuese posible insuflar simplemente en ellas "espíritu liberal".

Estas contradicciones desembocaron en la crisis política de 1956-57, en la que coincidieron una primera gran ola de luchas reivindicativas de la clase obrera y las primeras manifestaciones del movimiento estudiantil antifranquista.

La crisis puso de manifiesto la imposibilidad de la burocracia falangista de sacar al Estado franquista del atolladero. Por lo demás, los sectores

hegemónicos del bloque dominante rechazaron una solución basada en el incremento de poderes de la Falange (recuérdese el repudio unánime por parte de los grandes exponentes de la banca, de la industria, del Ejército y de la Iglesia del proyecto de Leyes Fundamentales presentado por el jerarca falangista Arrese en diciembre de 1956).

Ante la imposibilidad de una solución "liberal" incapaz de controlar el estallido del movimiento obrero y de una solución falangista repudiada por los sectores hegemónicos del bloque dominante, estos últimos aceptaron como su partido político a un nuevo grupo, que se había preparado en la sombra durante años: el Opus Dei, Este ofrecía la doble garantía de su integrismo católico, lleno de resabios fascistas, y de su tecnocratismo. Aparecía a los ojos del bloque dominante como el único grupo político capaz de enderezar la situación, racionalizando los mecanismos del Estado, sin poner en duda los fundamentos político-militares del mismo. . De este modo, en 1957 se formó un gobierno de militares y Opus Dei en el que los militares se encargaron de la política de represión del movimiento obrero (el general Alonso Vega, por ejemplo, fue nombrado ministro de Gobernación) mientras los opusdeistas se lanzaban a modernizar las estructuras administrativas del Estado y los mecanismos de acumulación capitalista.

El primer resultado de esta política fue el Plan de Estabilización de 1959. El Plan se llevó a cabo con el apoyo financiero y el asesoramiento del capitalismo internacional y consistió en reestructurar los mecanismos públicos (créditos, cupos, divisas, fijación de salarios, etc.) y privados de la acumulación capitalista a expensas de la clase obrera, que vió brutalmente rebajado su nivel de vida y tuvo que optar entre la resistencia desesperada o la emigración (fue entonces cuando se inició la emigración masiva hacia los países del Mercado Común). Uno de los objetivos centrales del Plan de Estabilización fue impulsar la concentración y la centralización de capitales -- es decir, el capitalismo monopolista -- meidante la liquidación de las llamadas "empresas marginales" y el favorecimiento de las concentraciones capitalistas. Se crearon, con ello, las bases para la expansión del capitalismo monopolista, sobre la base de una explotación más intensa y refinada de la clase obrera y una mayor vinculación a los mecanismos del capitalismo internacional.

## 3. DESARROLLO MONOPOLISTA, AUGE DEL OPUS DEI E INTENSIFICACION DE LA LUCHA OBRERA (1962-1970)

Desde el punto de vista del desarrollo capitalista, el Plan de Estabilización fue un éxito, y sentó las bases para unaaceleración de la acumulación capitalista.

Pese a todas las precauciones tomadas (reforzamiento del aparato represivo con los tribunales especiales y la Ley de Bandidaje y Terrorismo) la resistencia de la clase obrera resultó superior a la esperada y se manifestó con fuerza en las grandes huelgas de 1962. Como veremos más adelante, estas huelgas, iniciadas en Asturias, señalan el comienzo de un movimiento obrero que rompe, por fin, la camisa de fuerza del sindicato vertical y encuentra formas organizativas autónomas con las Comisiones Obreras.

Pese a la lucha de la clase obrera, el bloque dominante, estrechamente vinculado al capitalismo internacional, consiguió imponer ritmos elevados

de acumulación y de extracción de plusvalía. Entre 1958 y 1966, por ejemplo, la productividad en la industria aumentó en un 114% y en la agricultura en un 21'30%. La emigración masiva de mano de obra, la congelación de los salarios, la inflación, el refinamiento de los métodos de control y de organización del trabajo en las fábricas fueron los grandes mecanismos de esta acumulación.

Al mismo tiempo, el bloque dominante aceleró la reducción cuantitativa de la pequeña propiedad en el campo y muchos miles de pequeños propietarios agrícolas se trasladaron a las ciudades para engrosas las filas del proletariado urbano o integrarse en el sector de servicios. También se impulsó la reducción de pequeñas empresas industriales y se fomentó la concentración y centralización del capital.

Todo este proceso dió lugar a grandes transformaciones de la sociedad española. El campo perdió peso específico en favor de la industria y del sector servicios. La población se concentró cada vez más en los grandes núcleos industriales como Barcelona, Madrid y Bilbao y en otras ciudades de tradición obrera, como Zaragoza y Sevilla, mientras ciudades que parecían dormitar en el sopor agrario y mercantil, como Málaga, Pamplona, Valladolid, Huelva, etc. se transformaban en otros tantos núcleos industriales. Pero al mismo tiempo, zonas industriales de tanto arraigo como Asturias entraban en un proceso de regresión.

Estas transformaciones repercutieron, naturalmente, en la composición del bloque dominante y en sus alianzas de clase. La oligarquía financiera e industrial impuso su hegemonía, en detrimento de la vieja oligarquía agraria. Al mismo tiempo, el desplazamiento del centro de gravedad político y social hacia las ciudades obligó a la oligarquía a buscar un nuevo equilibrio que pasaba, esencialmente, por asegurarse la alianza (o la neutralidad, por lo menos) de las nuevas capas medias urbanas. La alianza con la burguesía y la pequeña burguesía pasaban, en cambio, a un segundo plano, sin dejar de constituir, no obstante, un elemento esencial del sistema.

Este desplazamiento del centro de gravedad del equilibrio político explica otro desplazamiento: el de la justificación ideológica del sistema . A partir de los años sesenta el acento se puso no tanto en el cultivo de los viejos valores imperiales y religiosos como en la nueva mística del desarrollo y de la eficacia técnica, del consumo como máxima aspiración, dirigida a la captación de las nuevas capas medias urbanas.

En la medida en que el Opus Dei conjugaba en su doctrina el respeto al integrismo (valores tradicionales) con el culto al desarrollismo y a la racionalización administrativa aparecía como el partido político más apto para encarnar los intereses de la oligarquía y obtener el apoyo o la neutralización de las capas medias del campo y de la ciudad.

En el plano político, este desplazamiento se tradujo en la adopción de la política llamada de "liberalización", cuyo punto culminante fue la Ley de Prensa de 1966. Pero esta liberalización fue acompañada de un recrudecimiento de la represión, ilustrado por los asesinatos del camarada Julián Grimau y de los anarquistas Granados Gata y Delgado Martínez en 1963 y por la violenta represión de la nueva ola huelguística en Asturias en julio del mismo año.

Esto demuestra que el verdadero objetivo de la "liberalización" era agilizar los cauces de comunicación entre el bloque dominante y el Estado, preparar la conquista político-ideológica de las nuevas capas medias y fomentar la penetración del capital extranjero. La otra cara de la operación era,

evidentemente, el recrudecimiento de la represión del movimiento obrero y sus vanguardias políticas, para evitar que la operación liberalizadora abriese un resquicio al enemigo de clase y se frustrase como tal operación.

Por otros lado, el proceso de concentración y centralización del capital acentuó la exasperación de la pequeña burguesía tradicional, exasperación que se tradujo políticamente en el auge del nacionalismo catalán y vasco (baste recordar la campaña contra Galinsoga en Cataluña), en la radicalización de ciertos sectores de la Iglesia y, hasta cierto punto, en la intensificación del movimiento universitario.

El problema básico del bloque dominante era llevar la operación liberalizadora hasta el final para abordar en buenas condiciones el postfranquismo. Para ello tenía que proceder a la eliminación sistemática de los restos de autarquía en el aparato económico y político, fomentar los mecanismos de integración y de organización del consentimiento, ligarse más estrechamente al capitalismo internacional y cimentar sobre bases sólidas su alianza con las capas medias urbanas. El aspecto fundamental de esta operación política era la creación de un sistema de partidos políticos que permitiese el juego de todos los sectores del bloque dominante y sirviese para neutralizar y controlar las capas medias, y dejando en la reserva política al Ejército, como carta última y no como partido político en primer plano.

Para la oligarquía la gran incógnita era -- y es -- sin embargo el movimiento obrero. La oligarquía temía -- y sigue temiendo -- que su fuerza política no sea suficiente para llevar a buen término la operación liberalizadora ante un posible estallido del movimiento obrero. Por eso sigue recurriendo a la espada del Ejército y no se atreve a desmantelar el aparato del sindicalismo vertical, pese al freno que éste representa para sus propósitos.

Por otro lado, el Opus Dei no le ofrece garantías suficientes. El asunto MATESA ha debilitado su fuerza política pero es que, además, el Opus se ha comportado más como fracción autónoma de la burguesía que como partido político de todo el sector hegemónico del bloque dominante. En vez de representar políticamente a éste, el Opus opera a través del Estado para desarrollar sus propios intereses económicos (industria, finanzas, etc.). Es un ejemplo típico de burguesía parasitaria.

A su vez, la Falange ha sido totalmente desplazada de los cargos ejecutivos, pese a los esfuerzos de sus actuales jerarcas, como Rodríguez de Valcárcel y Fernández Miranda, que intentan recuperar influencia a través del aparato legislativo-administrativo.

Y menos garantías ofrecen todavía los diversos sectores demócrata-cristianos, desde la extrema derecha de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas hasta la izquierda de "Cuadernos para el Diálogo", pasando por los Centristas de Areilza, pese a los esfuerzos que hacen estos últimos para aportar la baza de un control del movimiento obrero a través de sus acuerdos con el Partido "Comunista", es decir con el revisionismo.

La oligarquía se ve encerrada, pues, en un verdadero círculo vicioso. En la medida en que sigue recurriendo al Ejército como partido político principal y en que conserva la burocracia del sindicalismo vertical, el proceso liberalizador se congela y lo que pasa al primer plano es el aspecto represivo de su acción política. Para pasar del momento represivo al momento de la organización del consentimiento, necesita agilizar los cauces políticos y dar ciertas posibilidades de expresión a las capas medias urbanas. Pero en-

tonces corre el riesgo de no controlar la operación y abrir una brecha en el edificio del sistema, por el que puede colarse un movimiento obrero imprevisible.

Este círculo vicioso se traduce políticamente en una serie de compromisos que llevan a un verdadero inmovilismo. La expresión superior del compromiso es, seguramente la Ley Orgánica de 1967, que transforma el mecanismo liberalizador en un proceso lento y contradictorio de restauración monárquica bajo la protección suprema del Ejército y deja sin resolver, entre otros, el problema de la alianza política con las capas medias urbanas. El proceso seguido por la Ley Sindical y el Estatuto de Asociaciones de Acción Política del Movimiento es otra expresión de este compromiso. Y lo mismo cabe decir de la Ley de Educación, en la que la organización del consentimiento y la formación de cuadros técnicos alcanzan un peso específico equivalente al de la represión y la formación político-ideológica en sentido tradicional.

La crisis de 1966-67 fue, al respecto, un serio aldabonazo para el bloque dominante, que puso sordina a sus veleidades liberalizadoras y reforzó los mecanismos represivos, hasta culminar en el estado de excepción de 1969. Este último fue una verdadera operación "saneadora" para mantener el equilibrio del sistema en un momento en que las dificultades económicas acentuaban sus disensiones internas. Pero, además, sirvió para preparar el terreno antes de proceder a una operación tan delicada como el nombramiento del sucesor de Franco y el recambio de equipo gubernamental. En todo caso, fue una demostración de que los pretendidos"evolucionistas" carecen de iniciativa política propia y en momentos de dificultad prefieren dejar el terreno libre para que los llamados "ultras" se lo limpien de adversarios mediante la represión pura y simple. Con el estado de excepción se quería tener las manos libres para proceder a los necesarios reajustes sin el peligro de desbordamiento de las masas trabajadoras y populares e, incluso, sin interferencias de los sectores políticos democrático-liberales. .

El hecho de que el Opus Dei saliese victorioso de su pugna interna con la Falange y ocupase prácticamente solo el poder político no quiere decir, sin embargo, que el bloque dominante haya reconocido finalmente al Opus como su verdadero partido político. Significa, más bien, que los cauces de comunicación entre el bloque dominante y el Estado siguen siendo rudimentarios e inadecuados para las necesidades del propio bloque dominante. De hecho, el Estado español opera con los mismos mecnismos de la etapa de acumulación de los años cuarenta y sus canales de comunicación con el bloque dominante apenas han variado. En cambio, el bloque dominante y sus necesidades políticas han experimentado sensibles modificaciones. Este desfase se traduce en inmovilismo, en perduración de instituciones fascistas, en predominio político de los sectores más retrógrados y autoritarios. En este sentido, el Estado franquista es todavía un punto fuerte del bloque dominante en sus relaciones con la clase obrera. Pero es también un punto débil, porque reduce su margen de maniobra, distorsiona sus mecanismos de acumulación, impide una política ágil de alianza con las capas medias urbanas e imposibilita una política de integración del movimiento obrero -- como la que llevan a cabo las burguesías de más allá de los Pirineos -- en la medida en que se convierte en inmediatamente político el choque entre patronos y obreros. En este sentido, bien puede decirse que la pervivencia del Estado franquista obstaculiza la organización del movimiento obrero pero, al

mismo tiempo, acelera el paso de la reivindicación económica a la lucha política. Hechos como los de Erandio y Granada son claramente significativos, al respecto.

# 3 LA LUCHA DE CLASES ENTRE 1939-1970

## 1. LA POSTGUERRA

Con la derrota de la guerra civil, el movimiento obrero y popular entró en una grave postración. La mayoría de los cuadros políticos y sindicales de la clase obrera habían perecido en el conflicto o en la represión subsiguiente, se habían exilado o cumplían largas penas de cárcel y en los campos de concentración.

En algunas zonas montañosas de Galicia, Asturias, Cataluña, Andalucía y Levante subsistían núcleos aislados de guerrilleros en condiciones muy difíciles y en escaso contacto con el grueso de la población.

En las ciudades, sólo el Partido Comunista y algunos grupos anarquistas intentaban reorganizarse y pasar a la acción, pero eran sistemáticamente aniquilados por la durísima represión.

Sobre la clase obrera pesaba el enorme fardo de la acumulación acelerada de capital, de la compresión de los salarios, de la inflación de la prohibición de huelgas, de la aniquilación de sus partidos y sindicatos, del rígido encuadramiento en la disciplina de los sindicatos verticales, de la explotación más desaforada en nombre de los intereses del capital monopolista. Fueron loa años de hambre y de miseria, por un lado, y de enriquecimiento rápido y fácil por otro, con el estraperlo, los favores gubernamentales, la corrupción, los empleos burocráticos, etc.

Por su lado, las clases medias se debatían en un mar de contradicciones. La pequeña burguesía rural de la zona franquista buscaba su recompensa en la duración de cargos burocráticos en el Movimiento, el Sindicato Vertical o los múltiples recovecos del aparato administrativo. El régimen procuraba, por lo demás, contentar a este sector social asegurándole una rentabilidad mínima en las explotaciones agrícolas. No es otro el sentido del Servicio Nacional del Trigo y otros organismos creados de cara al campo. Estas capas medias rurales constituían, pues, el sector social en que se apoyaba el bloque dominante para poder concentrar su ofensiva contra la clase obrera.

En cambio otros sectores de la pequeña y mediana burguesía eran excluidos del sistema de alianzas con el bloque dominante, más por razones superestructurales que por razones económicas. Tal fue el caso de la pequeña burguesía catalana y vasca y de amplios sectores de la burguesía media que, en general, se habían inclinado por la República durante la guerra civil y habían encontrado un cierto cimiento político e ideológico propio con el nacionalismo. Estas capas también perdieron sus cuadros políticos e ideológicos tras la guerra civil, pero no resultaron tan diezmadas como el proletariado, víctima principal. Su desorientación era absoluta. Durante la guerra, grandes sectores de la pequeña burguesía resultaron traumatizados por la lucha de clases en la zona republicana y, sobre todo, por las experiencias colectivistas. De ahí su

orientación cada vez más reformista y pacifista, que encontró eco en la política del PC y del PSOE. Al terminar la guerra, una política hábil de captación por parte del Estado franquista habría hecho oscilar a estas capas hacia la alianza con el bloque dominante. Pero en vez de esto, el franquismo aplicó a este pequeña y media burguesía una política represiva y extremadamente dura que afectó no sólo a los cuadros sino también a la masa traumatizada. La prohibición del uso público de las lenguas catalana y vasca, la prohibición de todas las manifestaciones folklóricas, hasta las más inocentes, las vejaciones de todo tipo, la rígida centralización de la administración, acabaron por sumir a la burguesía periférica pequeña y media en la mayor de las perplejidades.

Cierto que el régimen les ofreció una válvula de escape con el estraperlo y la inflación pero, por otro lado, la política de acumulación acelerada de capital y de fomento de la concentración monopolista invalidaban los efectos integradores que aquella válvula pudiese tener.

## 2. LA OPOSICION EN EL EXILIO

Fuera de España se reconstituyeron todos los grupos políticos republicanos e incluso intentaron forjar un simulacro de continuidad con el mantenimiento de las Cortes de la República y del Gobierno republicano.

El problema con que se enfrentaban todos los partidos era el de cómo plantear la lucha contra el régimen franquista, tras la terrible derrota. La mayoría de los partidos republicanos buscaban la solución en el exterior mismo, es decir, confiaban en que la derrota de Alemania e Italia en la guerra mundial arrastraría consigo la caída del régimen franquista y que, por consiguiente, toda la tarea de la oposición consistía en tener a punto un equipo de recambio que ofreciese suficientes garantías a los aliados.

De este modo constituyeron dos organismos, la Junta Suprema de Unión Nacional, patrocinada por el PC, que se proponía unir todas las tendencias bajo un programa mínimo de restauración de las libertades democráticas y de elecciones constituyentes, y la Junta Española de Liberación, que agrupaba a socialistas, republicanos, nacionalistas y un sector de anarquistas. Mientras esta última se limitaba a preconizar la espera del final de la guerra y sólo confiaba en la ayuda aliada, la Unión Nacional veía la necesidad de llevar la lucha en el interior de España y de fomentar las acciones guerrilleras y las reivindicaciones. La Unión Nacional era, en las nuevas condiciones, la continuación de la línea política más correcta: la del Frente Popular.

A finales de 1944 los republicanos, los socialistas, los anarquistas, crearon un órgano más ambicioso, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que se proponía presentar una alternativa global al franquismo, al margen de los comunistas. Era, de hecho, la alternativa democrático-burguesa.

Por otro lado, al acercarse el final de la guerra se recrudecieron las actividades guerrilleras en España, a cargo del PC y de algunos sectores libertarios, hasta culminar en septiembre de 1944 con la invasión del Valle de Arán (Lérida), y en el enfrentamiento directo con un fuerte contingente militar franquista.

El fracaso de esta acción guerrillera y el clima internacional existente al término de la guerra propiciaron el acercamiento de los diversos grupos. Los comunistas, por ejemplo, renunciaron a la Unión Nacional e ingresaron en la

Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas.

Por otro lado, los monárquicos también jugaban la carta de la oposición, esforzándose por aparecer ante los ingleses y norteamericanos como la única garantía de mantenimiento del capitalismo en España tras la caída del franquismo. Este es el sentido del famoso telegrama dirigido por el pretendiente Juan de Borbón hijo de Alfonso XIII a Franco desde Lausana en 1944 y, sobre todo, de su manifiesto de marzo de 1945.

Para consolidar su posición, un sector monárquico entabló negociaciones con la A.N.F.D., procurando entenderse con los socialistas y aislar a los comunistas. Esta maniobra tuvo éxito gracias al clima general de guerra fría que no tardó en cernirse sobre el mundo y que si, por un lado, consolidaba al régimen franquista, por otro permitía aislar todavía más a los comunistas.

En 1947, el PSOE se retiró del gobierno en el exilio para negociar con los monárquicos y las entrevistas entre el socialista Indalecio Prieto y el monárquico Gil Robles culminaron en el acuerdo de San Juan de Luz, en el que se preveía un referendum-consulta para que el electorado español decidiese el régimen de su preferencia. Pero al mismo tiempo, Juan de Borbón se entrevistaba con Franco en el yate "Azor", jugando varias cartas a la vez según los avatares de la política norteamericana.

La guerra fría consolidó al franquismo, pese a las condenas platónicas de la ONU y a la retirada de embajadores porque lo que interesaba, sobre todo a los Estados Unidos, eran serias garantías de anticomunismo. Y el franquismo las daba enteramente. Esta consolidación provocó el hundimiento de la oposición en el exilio que se encontraba sin nada que ofrecer a los protectores yanquis. Estos, simplemente, habían preferido el "pájaro en mano" del franquismo, sin importarles lo más mínimo el programa de libertades democráticas que socialistas y monárquicos ofrecían como plataforma salvadora.

## 3. DE LA GUERRILLA A LA POLITICA DE RECONCILIACION NACIONAL DEL PC

Por su parte, el movimiento guerrillero del interior se encontraba en una situación desesperada. Tras la derrota de 1944-45 en los Pirineos se habían perdido las posibilidades de ampliar las bases gurrilleras. Además, la represión franquista se abatía implacablemente sobre la población de las zonas de actividad guerrillera para crear un clima de terror que impidiese la colaboración de dicha población con los guerrilleros. Fue la llamada "contraguerrilla". Según datos facilitados por la propia Guardia Civil, el número de guerrilleros muertos o capturados entre 1943 y 1952 fue de unos 5.000 (en cifras redondas) y el de capesinos detenidos en en concepto "cómplices" y "encubridores", de unos 20.000. La punta máxima de las acciones guerrilleras se situó en los años 1945, 1946 y 1947. Por otro lado, las guerrilas enlazaban difícilmente con un proletariado urbano terriblemente explotado y falto de cuadros políticos.

En cambio, en los centros industriales tradicionales se observaban ya los primeros síntomas de reactivación del movimiento obrero por cauces que nada tenían que ver con las guerrillas. Así, por ejemplo, el 1 de mayo de 1947 estalló la primera gran huelga de la postguerra en Vizcaya, en la que participó [illegible] del 75% de la clase obrera.

Todo esto hizo comprender a los dirigentes del PC la necesidad de proceder a un cambio táctico. En consecuencia se procedió a retirar las guerrillas y se preconizó la lucha dentro de las organizaciones legales existentes y, concretamente, dentro de los propios sindicatos verticales. La idea era que para movilizar a la clase obrera había que acudir a donde las masas obreras se encontraban realmente, aunque fuesen organismos concebidos especialmente para explotarlas férreamente. El trabajo en las organizaciones legales debía servir para llegar a las masas y movilizarlas fuera de estos organismos legales, mejor dicho, fuera y contra éstos.

La huelga general de 1951 en Barcelona fue el primer gran indicio de que las cosas estaban cambiando. Hasta cierto punto, la huelga de 1951 fue el último acto de la guerra civil, en el sentido de que las fuerzas políticas que intentaron encauzar el movimiento de las masas populares barcelonesas eran los restos del período republicano. Pero, al mismo tiempo, la huelga de 1951 fue el comienzo de una nueva etapa, porque en ella participaron masas trabajadoras nuevas, formadas en las durísimas condiciones de explotación de los años cuarenta. La huelga de Barcelona fue una explosión en la que se mezclaron las viejas y nuevas motivaciones. Para unos, era un acto de protesta política contra la dictadura que había ganado la guerra civil, Para otros -- los más -- era un grito de exasperación ante las tremendas condiciones de explotación a que les sometían el bloque dominante y su Estado. Con la huelga de 1951, las masas hicieron su primera gran aparición espontánea y combativa en la lucha política. Los restos de los antiguos partidos obreros resultaron desbordados y mientras unos desaparecían del todo otros, como el P.C., intentaban una profunda reconversión de su táctica y su estrategia. En todo caso, se entraba en una etapa en la que iban a aparecer nuevas fuerzas y nuevos cuadros. En ese sentido, bien puede decirse , pues, que la huelga de 1951 en Barcelona fue el último acto de la guerra civil.

Como se ha dicho más arriba, los pactos de 1953 entre el Estado franquista y los Estados Unidos también abrieron una nueva fase en el proceso de acumulación capitalista. La llegada de capitales extranjeros, con la consiguiente vinculación de España a los mecanismos económicos y políticos del capitalismo internacional (ingreso en la ONU, bases militares americanas en nuestro suelo, llegada de turistas, etc.) reveló que el aparato político y económico del régimen, montado para los años de la primera acumulación se adaptaba mal a la nueva situación.

Para hacer frente a la competencia internacional que se avecinaba, el capitalismo español se veía forzado a aumentar las tasas de acumulación e inversión, lo cual quería decir, intensificación de la productividad del trabajo, inflación acelerada, política de inversiones dirigida por el Estado. El I.N.I. pasó a ocupar un primerísimo plano en la economía española, siempre en el sentido de favorecer la concentración y centralización del capital y de desarrollar los sectores que el capital privado no encontraba rentables a corto plazo. De este período data la creación de empresas como ENSIDESA, por ejemplo.

Se inició, pues, un período de acumulación intensiva y de desarrollo tumultuoso, caótico, mal dirigido por un aparato estatal concebido para otras necesidades. Naturalmente, el peso de la operación recayó en las espaldas de la clase obrera, a la que se quiso imponer unas tasas de plusvalía cada vez más elevadas combinando los métodos anteriores (control estricto de salarios,

inflación, impuestos indirectos, represión política, etc.) con los nuevos y más refinados de los sistemas americanos de productividad. Pero la acumulación y el desarrollo capitalistas modificaron sensiblemente la composición cuantitativa y cualitativa de la clase obrera. Así, por ejemplo, entre 1950 y 1955 la población activa en la industria pasó de 2.700.000 personas (en cifras redondas) a 4.480.000. Esto significa un intenso movimiento migratorio, con las consabidas secuelas de barraquismo, superexplotación, bajos salarios, etc.

Esta clase obrera en formación, de procedencia campesina, violentamente explotada, empezaba, sin embargo, a cobrar conciencia de su fuerza y de sus posibilidades reivindicativas. En la medida que avanzaba la concentración monopolista, la clase obrera no sólo aumentaba en número sino que se encuadraba en unidades de producción que le abrían grandes posibilidades organizativas.

Pero, al mismo tiempo, carecía casi totalmente de dirección política. Una parte de los antiguos cuadros de la CNT optó por el compromiso con los mandos falangistas del sindicato vertical, mientras los antiguos líderes socialistas y republicanos se hubdían si remedio en el exilio, a la espera de una ayuda americana cada vez más ilusoria. El PC, por su parte, se orientaba lentamente hacia la elaboración de una línea política global que tuviese en cuenta los nuevos datos de la situación. Pese a algunas excepciones, puede decirse, pues, que el movimiento obrero se orientaba espontáneamente hacia un enfrentamiento reivindicativo contra el sistema sin dirección política coherente.

La crisis latente estalló en 1956-57 tras un proceso de inflación galopante, de baja de la peseta y de aumento brutal de los precios. En Navarra, en el País Vasco, y en Cataluña se iniciaron, en 1956, una serie de huelgas que se prolongaron en 1957 con el boicot de transportes en Barcelona y Madrid. El Gobierno reaccionó, por primera vez, a la defensiva y decretó un aumento de salarios del 27%, que resultaba de todos modos insuficiente para satisfacer las aspiraciones de las masas.

Dato característico de la crisis es que la ola huelguística coincidió con una profunda crisis universitaria culminada en las manifestaciones antifalangistas de Madrid en febrero de 1956 y en las huelgas de la Universidad de Barcelona a finales de 1956 y comienzos de 1957. El movimiento universitario era confuso pero se caracterizaba por un rasgo inequívoco: el repudio total del sindicato fascista (el S.E.U.) y la aspiración a una apertura liberal. Tal era el sentido de las manifestaciones de Madrid y de la Asamblea del Paraninfo de Barcelona en febrero de 1957. Todo ello era, a su vez, el reflejo del cambio general de la situación del país, que planteaba unas exigencias a la Universidad que ésta no podía satisfacer con su estructura enquilosada.

Como ya hemos dicho, la crisis se saldó con un cambio político importante: el desplazamiento de Falange y la entrada en el gobierno de un nuevo partido político: el Opus Dei.

Pero la lucha obrera y universitaria puso de relieve la existencia de una nueva oposición liberal formada por tránsfugas del franquismo, como Ridruejo o Laín Entralgo y por jóvenes intelectuales de reciente formación, muchos de ellos procedentes del catolicismo.

Esta oposición se distinguía de la anterior por un rasgo fundamental: había surgido en el interior del país y era producto de la evolución misma del

sistema. Así surgieron nuevas siglas políticas, como el Partido Social de Acción Democrática (P.S.A.D.) de Ridruejo, la Izquierda Demócrata Cristiana (I.D.C.) de Jiménez Fernández, la Agrupcación Socialista Universitaria (A.S.U.), que intentaba revitalizar la línea del P.S.O.E., y el Frente de Liberación Popular (F.L.P.) formado esencialmente por intelectuales católicos radicalizados. Entre todos formaban una oposición débil y poco estructurada, de contenido esencialmente demócrata liberal, pese a los radicalismos verbales de algún grupo. Pero no dejaban de constituir un síntoma revelador de la nueva situación.

El Partido Comunista, el único que había estado como tal en la brecha desde el primer momento, experimentó un serio crecimiento organizativo y capitalizó los beneficios de su política de trabajo en las organizaciones de masas. Su V Congreso, celebrado a comienzos de 1954, elaboró una línea política que intentaba recoger las enseñanzas de la lucha y que no tardó en recibir el nombre de política de reconciliación nacional. Su línea maestra era que había que dar por terminada la guerra civil y partir de la realidad existente, tras quince años de franquismo. Este se interpretaba como el instrumento político directo de una reducida minoría de monopolistas que habían congelado el desarrollo económico del país y precipitado a todos los españoles en la ruina. Se trataba, por consiguiente, de unir a todos los perjudicados por la oligarquía y concentrar todos los esfuerzos en el derrocamiento del Estado franquista, olvidando la línea divisoria de la guerra civil. El acierto de la política de reconciliación nacional es que intentaba hacer converger en un mismo movimiento antifranquista la lucha obrera y popular y las tentativas burguesas de liberalización.

Con esta línea política, que interpretaba correctamente algunos datos de la nueva situación pero erraba sustancialmente -- como vermos más adelante -- en la interpretación del Estado franquista y del tipo de desarrollo económico habido hasta entonces, el PC se lanzó a la tarea de encabezar un movimiento obrero espontáneo que cada vez empujaba con más fuerza.

## 4. CRISIS, ESTABILIZACION Y DESARROLLO CAPITALISTA (1957-1962)

El aumento de salarios de 1957 no detuvo el movimiento reivindicativo de la clase obrera. En marzo de 1958 estalló una ola huelguística en Asturias que el régimen intentó atajar suspendiendo varios artículos del Fuero de los Españoles, concretamente los que hacen referencia a la libertad de residencia, a la inviolabilidad de domicilio y a la detención arbitraria. En la misma primavera de 1958, la huelga conmovió a casi todo el sector metalúrgico de Barcelona y se extendió a Guipúzcoa y Vizcaya (donde paralizó el gran complejo de Altos Hornos).

El Estado franquista respondió intensificando la política represiva. La ley de 22 de marzo de 1957 estableció la responsabilidad colectiva en caso de huelga. El 24 de enero de 1958 se creó la Jurisdicción especial para actividades extremistas, el siniestro tribunal del coronel Eymar. Aumentaron las detenciones y las condenas de dirigentes comunistas y otros antifranquistas.

Pero, al mismo tiempo, el Opus Dei emprendía la política de racionalización administrativa del aparato estatal y de los mecanismos económicos

del sistema y preparaba la plena integración en los circuitos del capitalismo internacional. En 1958, el Estado franquista entró en la OECE, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, órganos de acción del gran capital norteamericano. Entre 1957 y 1958, se dictaron una serie de leyes para reorganizar la Administración del Estado y las relaciones de ésta con los organismos paraestatales. Para encauzar la reforma y fijarle unos límites precisos y estrictos, Franco promulgó el 17 de mayo de 1958, la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, que viene a ser el código de normas, "permanentes e inalterables por su propia naturaleza" que deben cumplir todos los funcionarios y hombres políticos del sistema.

Mientras tanto, la oposición pugnaba por encontrar una línea justa y dar una salida a la situación. En el exilio, los socilaistas y los republicanos se hundían cada vez más en el pantano de los pactos y declaraciones (como el llamado Acuerdo de París, de abril de 1957) dirigidos a un inexistente protector americano. Los monárquicos creían inminente su hora y si, por un lado, daban ministros a Franco y el pretendiente confiaba a éste la educación de Juan Carlos, por otro sus prohombres creaban un embrión de partido autónomo: la Unión Española, fundada en enero de 1959 bajo la dirección de Gil Robles.

El Partido Comunista, consecuente con su interpretación de la realidad, se lanzaba a organizar grandes acciones interclasistas contra un Estado que creía aislado y en plena descomposición. La Jornada de Reconciliación Nacional del 5 de mayo de 1958 y la Huelga Nacional Pacífica del 18 de junio de 1959, fueron otros tantos fracasos de esta línea. El P.C. ponía el acento en la movilización de todos los sectores contra la dictadura, a base de una intensa propaganda y de acuerdos por arriba con los grupos liberales de oposición. Con ello descuidaba totalmente la organización concreta de la clase obrera y sacrificaba esta tarea prioritaria a un hipotético acuerdo con unas fuerzas que representaban muy poco y que, además, aprovechaban las ofertas del P.C. para atribuirse más peso del que tenían en realidad. La Jornada de 1958 y la Huelga de 1959 fueron, por lo demás, una clara muestra de cómo concebían los dirigentes del P.C. la lucha contra el franquismo. En vez de propiciar la organización autónoma de la clase obrera y de enfocar las acciones generales como la culminación de una serie de luchas organizadas, lanzaban consignas agitatorias que no hacían avanzar en nada el nivel de organización y de combatividad de las masas populares. Se prefería la movilización-testimonio a la organización de la clase obrera y a la formación de cuadros políticos en la lucha.

A su vez, el FLP, formado por católicos radicalizados y estudiantes avanzados , preconizó una línea verblamente revolucionaria que quería situarse a la izquierda del P.C. Era un grupo que carecía de la más mínima base marxista-leninista y, en realidad, llevaba a cabo una política social-demócrata. Su análisis encajaba todavía menos que el del P.C. porque no sólo exageraba el nivel de conciencia revolucionaria del proletariado en aquellas circunstancias y no tenía en cuenta para nada la fuerza real del Estado ni las modificaciones ocurridas en el bloque dominante, sino que apenas tenía ninguna vinculación efectiva con la clase obrera.

Cuando el régimen comprobó la debilidad de la oposición y su incapacidad de llevar el movimiento de masas a un punto de enfrentamiento directo con

el Estado, se lanzó a su operación más arriesgada: el Plan de Estabilización.

El objetivo del Plan de Estabilización era eliminar algunos de los obstáculos económicos y administrativos que impedían la total vinculación de la economía española con el capitalismo internacional. Se trataba de reducir y agilizar el aparato burocrático, fomentar la concentración y la centralización del capital, eliminando empresas marginales y abrir mejor las fronteras al capital extranjero. La operación se cargó, esencialmente, sobre las espaldas de la clase obrera y, en menor grado, sobre las de la pequeña burguesía y el campesinado. Se bloquearon los salarios, aumentó el paro (que se enjugó en parte fomentando la emigración al extranjero: fue entonces cuando empezó la emigración masiva a los países del Mercado Común), se restringieron los créditos bancarios, se redujo el consumo interior, se reestructuró el sistema arancelario, se devaluó la peseta fijando una paridad única (60 ptas. por dólar) y se fomentó la exportación de productos agrícolas y la importación de maquinaria. Todo ello con la ayuda directa del capitalismo internacional, el americano sobre todo.

La premisa principal de la operación era, como hemos visto, comprobar que las fuerzas de oposición eran incapaces de poner en marcha un gran movimiento de masas. Pero el Estado franquista se precavió todavía más poniendo a punto una serie de nuevos instrumentos represivos. En junio del mismo año 1959 se promulgó la Ley de Orden Público, y la actividad de los órganos represivos aumentó, golpeando sobre todo a los comunistas (como S. Sánchez Montero) y también a militantes del F.L.P. y a luchadores anarquistas. Según el propio Vicesecretario de Ordenación Social, los salarios reales de los trabajadores afectados por la supresión de horas extras se habían reducido en un 23%.

En general, la oposición fue incapaz de movilizar a los trabajadores contra la estabilización y la represión. Hubo algunas acciones de tipo terrorista, que la dictadura reprimió implacablemente (ejecución a garrote vil de Antonio Abad Donoso acusado de terrorismo, en marzo de 1960, por ejemplo). Un grupo de 339 sacerdotes vascos hizo pública una carta contra las torturas y la censura, y los monárquicos de Gil Robles presionaron a Juan de Borbón para que se desmarcara del Estado franquista. El PC, el FLP, el PSOE multiplicaron las declaraciones contra el régimen; un grupo republicano-anarquista, el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (D.R.I.L.) intentó montar artificialmente una serie de acciones espectaculares, que no tuvieron ninguna repercusión. En estas condiciones, el Plan de Estabilización resultó un éxito para el bloque dominante y éste pudo emprender una nueva fase de acumulación acelerada con métodos más refinados de extracción de plusvalía (aumento de la productividad, desarrollo de los bienes de consumo duradero, inversiones extranjeras, turismo, programación indicativa, etc.).

Para aumentar su margen de maniobra, el Estado franquista había iniciado una revisión cautelosa de los mecanismos verticalistas de encuadramiento de la clase obrera. La Ley de Convenios Colectivos de abril de 1958 fue la expresión más clara de este cambio de política. Hasta entonces, el sistema de bloqueo de los salarios se basaba en las Reglamentaciones de Trabajo dictadas por el Ministerio de Trabajo. A partir de 1958, se quería que fuese la propia patronal la que negociase con los trabajadores la política de rentas, aunque reservándose el Estado el control supremo de la negociación e imponiendo, en caso de desacuerdo insalvable, las llamadas Normas de Obligado Cumplimiento.

Era un primer paso hacia una política de rentas más sutil y ágil y, por lo mismo, más integradora (por lo menos en la mente de los gobernantes franquistas). Cabe decir, sin embargo, que esta política tardó en ponerse en marcha realmente. En 1958, sólo se aprobaron 7 convenios colectivos, que afectaron a un total de 18.547 obreros, Y cuando en 1962 experimentó realmente un gran salto (1.538 convenios que afectaban a 2.316.413 obreros) fue por otras razones, como vermos más adelante.

El P.C. y los demás grupos de oposición reaccionaron contra la ofensiva patronal y estatal con medidas inadecuadas. El P.C. llevó hasta sus últimas consecuencias su política de aprovechamiento de los cauces legales y de movilización indiscriminadas de las masas, creando la Oposición Sindical Obrera (O.S.O.), que se concebía como una especie de contrasindicato en el interior del propio sindicato franquista. En la mayoría de los casos coincidía con la propia organización del P.C., sin conseguir apenas una verdadera movilización de las masas obreras. La contradicción básica de la Oposición Sindical era que tenía un carácter exclusivamente político y casi nunca intentó llevar adelante una verdadera lucha reivindicativa en la empresa. Por su parte, los restos exilados de las viejas centrales sindicales (UGT, C.N.T., Solidaridad de Trabajadores Vascos), que no representaban ya nada y que sólo subsistían como siglas alimentadas por un anticomunismo visceral, crearon un organismo totalmente artificial, la Alianza Sindical Obrera (A.S.O.), que sólo logró algún leve apoyo entre viejos trabajadores del País Vasco.

Estos mismos grupos, junto con los restos de partidos socialdemócratas y republicanos del exilio, crearon otra organización unitaria fantasmagórica, la Unión de Fuerzas Democráticas en junio de 1961, cuya finalidad era aislar a los comunistas para conseguir un hipotético y cada vez más lejano favor de las potencias imperialistas.

El F.L.P. por su lado, se configuró como un grupo de tipo federativo, con una organización vasca (E.S.B.A.) y otra catalana (F.O.C.). El triunfo de la revolución castrista en Cuba había dado nuevos argumentos a este grupo que pretendía aplicar a España mecánicamente la misma táctica que había dado la victoria a los guerrilleros cubanos. Lo cierto es que el procastrismo verbal del F.L.P. tenía como función principal desarrollar el anticomunismo, presentando la revolución cubana como la demostración de que los partidos comunistas no sirven como instrumentos para hacer la revolución. En realidad, el F.L.P. nunca intentó poner en práctica sus posiciones insurreccionales y guerrilleras. Por eso las Organizaciones Frente no tardarían en hundirse ante la prueba de los hechos.

## 5. EXPANSION MONOPOLISTA Y MOVIMIENTO ESPONTANEO DE LA CLASE OBRERA (1962-1967)

### A. El surgimiento de Comisiones Obreras.

El año 1962 señala el comienzo de la gran expansión monopolista y del desarrollo espontáneo de un impetuoso movimiento obrero.

La renta nacional que hasta entonces había fluctuado en torno a índices de aumento anual más bien bajos, experimentó un brusco salto adelante en 1962, con un 10'1% de aumento respecto a 1961. La aceleración continuó hasta 1966 (7'3% de aumento) para experimentar una brusca contracción en 1967 (2'8%), año

de crisis.

El proceso de concentración monopolista avanzó rápidamente en la siderurgia, el sector enérgético,en la banca. El Estado franquista favoreció abiertamente este proceso, con una política de fomento de la concentración, de creación de polos de desarrollo, de destrucción de empresas marginales, de gestión directa de empresas no rentables, de reestructuración de ramos tradicionales (como el textil) en sentido monopolista.

La penetración del capital extranjero experimentó también un gran salto adelante. Las intervenciones libres, que podían alcanzar el 25% del capital de las empresas se permitieron hasta el 50% y en 1963 se abolieron prácticamente todas las limitaciones.

Se inició el boom turístico que no tardó en convertirse en la palanca esencial para financiar la importación de bienes de equipo y equilibrar una balanza de pagos altamente deficitaria. También desempeñaron un importante papel las remesas de los trabajadores españoles en el extranjero: el régimen mataba, así, dos pájaros de un tiro: reducía un paro que le habría podido causar grandes conflictos y enjuagaba el déficit de la balanza comercial.

Hubo, incluso, una cierta expansión internacional del capitalismo español, dirigido preferentemente a América Latina y a los países árabes. Era, en realidad, la integración del capital español en la división capitalista internacional del trabajo.

La base de esta expansión era, evidentemente, la explotación intensiva de la clase obrera. Es cierto que hubo un avance considerable de las inversiones en maquinaria y en tecnología modernas, pero lo esencial era la intensificación de los ritmos productivos (recorte sistemático de los tiempos, perfeccionamiento de los sistemas de primas e incentivos, etc.). Mientras la productividad aumentaba a un ritmo acelerado, los salarios reales se estancaban o aumentaban en mucha menor proporción. Y si aumentaban era únicamente por la lucha de la clase obrera.

Al mismo tiempo, empezaba a perfilarse un cambio fundamental eb la estructura de las fuerzas productivas. Concretamente, la agricultura (que en 1960 todavía representaba el 41´7% de la fuerza de trabajo) empezaba a dejar de ser el sector numéricamente más importante de la estructura productiva española, para ceder pronto el primer lugar al sector industrial, y pronto incluso el segundo al sector servicios. Esto significaba una acelerada despoblación del campo (por emigración interior y exterior), una concentración masiva de trabajadores en unas cuantas zonas industriales, con todos los problemas de alojamiento, de transportes, de adaptación a nuevas formas de vida, de cambio de mentalidad que esto comportaba. La emigració campesina afectaba básicamente a jornaleros agrícolas de las zonas latifundistas (Andalucía, Extremadura), lo cual permitía reestructurar el trabajo en el campo en sentido capitalista (por ejemplo, creando grandes explotaciones agropecuarias), al tiempo que aumentaba la oferta de peonaje en los centros industriales.

En abril de 1962, esta situación desembocó en una primera gran ola de huelgas que marcaba el comienzo de una nueva fase del movimiento obrero en España. La ola comenzó en Asturias y en pocos días se extendió como un reguero de pólvora hasta abarcar 60.000 mineros de todas las cuencas asturianas. Pronto desbordó el foco inicial y se generalizó a la mayoría de centros mineros de toda España.

Por las mismas fechas, la lucha obrera de la C.A.F. de Beasaín (Guipúz-

coa) fue reprimida con un lockout patronal que desencadenó a su vez un vasto movimiento de solidaridad obrera en el sector metalúrgico del País Vasco, hasta un total de 30.000 obreros.

La huelga repercutió, aunque más débilmente, en otros puntos del país, como Cataluña, Madrid, Cádiz (Bazán) y Sagunto (Altos Hornos), y dió lugar a ciertas acciones de solidaridad entre los estudiantes de Madrid y Barcelona.

Fue la primera gran huelga de masas en la historia del régimen franquista, que éste intentó detener con una dura represión. El 4 de mayo decretó el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa y al amparo de esta situación detuvo a centenares de obreros y deportó a muchos de ellos (la mayoría jurados de empresa).

El resultado principal de la ola huelguística de 1962 fue la ruptura del bloqueo de salarios. Así, por ejemplo, pese a la actitud intransigente del gobierno, una parte de la patronal se avino a negociar directamente con los trabajadores, al margen del sindicato vertical. Este fue el segundo gran resultado de la huelga: la creación espontánea de un principio de organización autónoma de la clase obrera, al margen del sindicato vertical. Esta organización autoónoma surgió en forma de comisiones de fábrica y de mina constituídas sobre la marcha por iniciativa de los trabajadores. Su núcle o inicial fueron las asambleas de enlaces y su misión era dirigir la acción reivindicativa, negociar directamente con la patronal y orientar la lucha en todo momento. En la mayoría de los casos, estas comisiones eran transitorias y se disolvían una vez alcanzados los objetivos fijados, pero en otros permanecían como órganos de dirección efectiva de la clase obrera en sus lugares de trabajo. Los miembros de estas comisiones eran, generalmente, los obreros más abnegados y de mayor nivel político. La mayoría eran militantes comunistas y católicos, pero en algunas zonas tuvieron una cierta participación los miembros del FLP e incluso de la UGT. Pero junto a estos militantes surgieron valiosos cuadros obreros de nueva planta, revelados en el fuego mismo de la acción.

Así surgió el movimiento de <u>Comisiones Obreras</u> que pronto se concibió por el PC como un movimiento abierto y unitario que debía agrupar a obreros de las más diversas tendencias (incluso falangistas opuestos al régimen). Debia extenderse a todos los ramos y unificarse mediante una serie de órganos de coordinación, sobre la base de un programa mínimo reivindicativo y democrático.

La nueva ola de huelgas de 1963, iniciada también en Asturias, reforzó esta orientación, que no tardó en plasmarse con la creación de Comisiones Obreras en los principales centros industriales del país y concretamente (aparte de Asturias y el País Vasco) en Madrid, Cataluña y Sevilla.

Ahora bien, las Comisiones Obreras creadas de este modo adolecían de un defecto importante: más que el resultado político de un movimiento espontáneo de la clase obrera, eran la importación de formas de organización surgidas en condiciones muy particulares, como las de Asturias y el País Vasco. Esto, en si, no constituye ningún defecto pues precisamente, la tarea de la organización política del proletariado consiste en propagar las formas de organización y lucha que en cada momento están más adecuadas al nivel de conciencia de las masas, para impulsar su desarrollo. El defecto radicó en que a partir de esta importación del movimiento de Comisiones no se lanzase una lucha reivindicativa en las empresas que vinculase a C.O. con las masas. Al no existir esta movilización, las C.O. se confundieron con los mismos militantes de los gru

pos políticos, con la consiguiente reproducción en su seno de las luchas políticas e ideológicas de estos grupos. Que estas luchas existan es natural y sano. Pero no si se libran al margen de las masas, dentro de organismos más o menos artificiales, donde terminan degenerando en lucha de capillistas.

Por lo demás, las C.O. tomaron rápidamente, bajo la influencia del P.C. una orientación democrático-liberal que no era más que la transposición, a nivel de la lucha obrera, de la plataforma democrática y antifranquista de la política de reconciliación nacional (libertades democráticas, derecho de huelga, sindicato, amnistía, aumento de salarios, etc.). Esto, que en principio podía ser válido en la medida que relfejase el nivel real de conciencia y de organización de la clase obrera, era, por el contrario, una opción consciente de la dirección PC de las Comisiones que veía a éstas como un movimiento socio-político y no como el embrión de un sindicato de clase. Para el PC, las Comisiones Obreras eran una parte de un gran movimiento interclasista contra la dictadura en el que el movimiento, precisamente, tenía más importancia que la organización autónoma del proletariado. De aquí la tendencia a llevar la lucha de C.O. dentro de los cauces del sindicato vertical, que era una forma de crear una oposición sindical democrática y de llegar, eventualmente, a la sustitución del sindicato vertical por un sindicato democrático de trabajadores.

En la óptica de los dirigentes del PC la reducción de C.O. a un movimiento antifranquista, integrable en una vasta coalición de fuerzas opuestas a la dictadura, ligaba perfectamente con su visión estratégica y táctica general. Pero, de hecho, equivalía a situar en segundo plano el problema fundamental de la organización autónoma de la clase obrera y a frustrar las enormes posibilidades abiertas con el estallido espontáneo de 1962. En la práctica, el movimiento de C.O. se convertía en un elemento negociable dentro de una política general de alianzas antifranquistas a corto plazo. Más que a organizar la clase obrera, los dirigentes de C.O. se dedicaban a promover asambleas abiertas, a buscar la legalidad y a sentarse en mesas redondas con los dirigentes de la oposición burguesa.

Cierto que en algunos lugares -- en Madrid y Sevilla, concretamente -- las C.O. consiguieron en un primer momento y al amparo de la desorientación provocada en el propio Estado franquista por el estallido de la ola huelguística, algunos éxitos espectaculares. El aprovechamiento de un instrumento legal, como era la Ley de Convenios Colectivos, permitió importantes movilizaciones reivindicativas y fue la palanca decisiva para la ruptura del bloqueo de salarios. Pero la insistencia en estas formas de lucha dejó demasiados flancos abiertos. Y cuando el Estado franquista desencadenó la represión contra C.O. éstas resultaron terriblemente vulnerables.

Así, por ejemplo, la participación casi abierta de los dirigentes de C.O. en las elecciones sindicales de septiembre-octubre de 1966 como tales dirigentes de C.O., con el programa de éstas por delante, cuando se había iniciado ya la crisis económica de 1966-67 y el bloque dominante estaba pasando a una fase de endurecimiento en su política de acumulación, facilitó tremendamente la represión franquista. Al régimen le bastó perseguir, destituir y encarcelar a los dirigentes de C.O. que habían copado los cargos de enlaces y jurados de empresa para descabezar el movimiento.

En Barcelona y demás centros industriales de Cataluña es, quizá, donde

más evidentes resultaron las limitaciones de la concepción democrático-liberal de C.O. En su implantación intervinieron no sólo el PC-PSUC y el F.O.C. (la rama catalana del F.L.P.) sino también grupos sindicalistas católicos como el S.O.C., la H.O.A.C. y la J.O.C. que desempeñaron, al principio, un papel bastante importante y marcaron el movimiento de Comisiones Obreras con su impronta.

Todos los grupos políticos catalnes se sentían fascinados por la experiencia del movimiento universitario, con su organización por Facultades y sus órganos de coordinación que culminaron con la desfrucción del sindicato fascista (el S.E.U.) y la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes. El sistema de asambleas abiertas y delegados elegidos democráticamente practicado por los estudiantes se traspuso mecánicamente a la lucha obrera y sirvió de modelo inspirador para la organización del movimiento de Comisiones Obreras.

Estas se convirtieron, pues, en una serie de órganos formales escasamente representativos y muy pco arraigados en las grandes empresas. Las C.O. participaban en mesas redondas con los dirigentes de la oposición burguesa catalana, tomaban parte en acciones interclasistas como la del 11 de septiembre, organizaban actos culturales de tipo democrático-liberal, etc. La lucha principal de sus militantes se centraba en el control de los órganos formales y los grupos políticos se combatían a golpes de mayorías y minorías y de Comisiones Nacionales que mandaban más que las Locales y de Locales que mandaban más que las del Ramo. Sólo en algunos casos aislados las C.O. consiguieron poner en marcha y dirigir acciones obreras de cierta envergadura, y más por la actividad abnegada de sus militantes que por las directivas de sus órganos coordinadores.

## B. Reactivación política de las capas medias y nueva política de alianzas del bloque dominante.

### a) La pequeña burguesía y las nuevas capas medias.

La explosión del movimiento obrero radicalizó los problemas de todos los sectores de la sociedad española.

La pequeña burguesía tradicional, enraizada sobre todo en Cataluña y el País Vasco, donde cuenta con una cierta tradición política e ideológica gracias al nacionalismo, fue una de las víctimas del Plan de Estabilización. La restricción de créditos, la reducción del poder adquisitivo de la clase obrera, la presión tributaria y el fomento de la concentración monopolista precipitaron a esta pequeña burguesía en una situación realmente agustiosa, que agravó un proceso de irremediable decadencia.

Este sector se expresa políticamente a través del nacionalismo. De ahí la reactivación a partir de 1960 de los planteamientos nacionalistas que en Cataluña tuvieron repercusiones políticas, como la campaña contra el director de "La Vanguardia", Galinsoga, y el acto del Palacio de la Música en 1960. En Euzkadi, el movimiento nacionalista adquirió tonos más violentos porque entre la pequeña burguesía exasperada y el Estado no se interpone una burguesía reformista, capaz de hacerle concebir ilusiones. En Cataluña, an cambio, esta burguesía reformista, no ligada directamente al Estado y capaz de hacer planteamientos neoliberales y europeístas hace concebir a la pequeña burguesía catalana ilusiones de un cambio de situación y de una mejora de perspectivas sin

violencias. El nacionalismo se convierte entonces en la racionalización, en la expresión ideológica de esta ilusión en la fuerza transformadora de la burguesía no franquista.

Simultáneamente apareció con gran fuerza en la escena política un nuevo factor, cuantitativamente importante y difícil de encuadrar. Nos referimos al vasto e informe conglomerado de nuevos grupos, esencialmente ligados al desarrollo de la economía urbana (industria y servicios) y que, a falta de otro término mejor, designamos con el nombre de capas medias urbanas.

Entre ellas cabe incluir elementos tan diversos como los pequeños empresarios industriales que van a remolque de la propia concentración monopolista (propietarios de empresas auxiliares y de talleres especializados, por ejemplo) y que en algunos casos han conseguido incluso vincularse directamente al capital extranjero; los técnicos y ejecutivos del vasto sector de la distribución comercial y de los servicios (publicidad, bienes de consumo duradero, etc.); los miembros de las profesiones liberales, que están en pleno proceso de reconversión hacia el régimen asalariado pero que no se pueden confundir ni mucho menos con la clase obrera; los sectores desarrollados por el aprovechamiento del turismo y por la especulación inmobiliaria; la gran masa de técnicos y funcionarios de grado medio e inferior, etc.

Ya hemos dicho que estas capas medias urbanas forman un conglomerado difícil de reducir a un común dominador. Dentro de ellas cabe distinguir sectores irremediablemente vinculados al bloque dominante, otros susceptibles de integrarse en el bloque popular y otros, en fin, que pueden ser políticamente neutralizados por una buena línea táctico-estratégica de éste.

Pero todos comparten algunos rasgos políticamente muy importantes. La mayoría proceden de la pequeña burguesía tradicional e incluso de la clase obrera. Su "ascenso" social se ha producido en el marco de la expansión monopolista y son muchos los miembros de estas capas que se sienten identificados con los valores ideológicos que presiden dicha expansión (europeísmo, tecnocratismo, desarrollismo, etc.) y que en algunos casos llegan a planteamientos neoliberales. En Cataluña y en el País Vasco este "ascenso" es, a la vez, un proceso de diferenciación social respecto a una masa obrera inmigrada, es decir, proveniente de toro contexto social y cultural..

Esto hace que dichas capas medias constituyan un indudable caldo de cultivo para el nacionalismo, en la medida en que su "ascenso social" se identifica con la diferenciación cultural y casi racial.

Pero, al mismo tiempo, estos sectores se han visto privados, por la existencia del Estado franquista, de canales de expresión política e ideológica propia que permita darles una sensación de estabilidad. La política de "liberalización" tenía por objeto, entre otras cosas, satisfacer este afán de expresión política de las capas medias, pero sus límites eran tan estrictos que sólo en muy escasa parte consiguió el mencionado objetivo.

De ahí la enorme ambigüedad política e ideológica de estas capas medias urbanas, que en parte son susceptibles de movilización antifranquista y en parte son integrables en el sistema por su agudo sentido de diferenciación clasista y por su receptividad a planteamientos interclasistas, como el del nacionalismo.

La presencia política de la pequeña burguesía tradicional y de las nuevas capas medias se manifestó no sólo en forma de acciones políticas explícita-

mente nacionalistas sino también en forma de reafirmación cultural, como lo demuestra el auge espectacular de la nueva canción popular ("Nova Cançó") y de las editoriales en lengua catalana.

Pero las opciones políticas y organizativas del movimiento eran muy poco claras. Y aunque autoridades religiosas como el Abad de Montserrat o elementos laicos como algunos de los nuevos grupos nacionalistas surgidos en Cataluña por los comienzos de los años sesenta, intentaron dar un mínimo de coherencia política al estallido, éste vegetó prácticamente en la pura indigencia ideológica. En el País Vasco, en cambio, el nacionalismo de la pequeña burguesía adoptó de entrada formas más radicales, como las del movimiento E.T.A. que le llevaron a enfrentarse violentamente con las estructuras represivas del régimen franquista.

En general, puede decirse que la acción política de la pequeña burguesía y de las capas medias urbanas es ambigua. Por un lado, los planteamientos nacionalistas la llevan a un enfrentamiento con el Estado, que sigue aferrado a valores tradicionales de centralismo y de nacionalismo católico-imperial. En este sentido, el nacionalismo impide que el bloque dominante neutralice políticamente a la pequeña burguesía y a las capas medias urbanas y, en consecuencia, impide la propia consolidación política del bloque dominante. Es una demostración más de que el Estado franquista obstaculiza la operación del bloque dominante consistente en asegurarse la alianza de las capas medias para la transición a un tipo de Estado menos directamente represivo que el actual.

Por otro lado, el carácter interclasista de los planteamientos nacionalistas hace que las capas medias y la pequeña burguesía puedan ser puestas políticamente a remolque de sectores burgueses -- como los catalanes -- que se desmarcan del franquismo para asegurarse posiciones de fuerza en el futuro inmediato.

Dicho de otra manera, el nacionalismo puede ser un catalizador de las inquietudes de la pequeña burguesía y de las capas medias urbanas y un factor de desequilibrio que obstaculice la consolidación del bloque dominante. Pero también puede ser una gran arma del bloque dominante para consolidar su alianza con las capas medias y, sobre todo, para aislar políticamente al proletariado.

b) El movimiento universitario

En el núm. 8 de B.R. publicamos ya unas "Tesis sobre el movimiento universitario" en las que definíamos el papel político del movimiento universitario y hacíamos una breve historia de su desarrollo. A ellas nos remitimos.

Pero a modo de resumen diremos que la Universidad ha sido uno de los aparatos ideológicos del Estado que ha entrado primero en crisis. La Ley de Ordenación Universitaria de 1943 creó una Universidad esencialmente dedicada a difundir valores anacrónicos. Era más un aparato difusor de principios doctrinales de la Iglesia y de Falange y un aparato de formación de minorías tradicionales que un instrumento de creación de cuadros técnicos para el desarrollo monopolista. La acumulación acelerada de capital se hacía a base de una tremenda explotación de la clase obrera, con escasos contactos con el capitalismo internacional. Por ello el bloque dominante -- en el que todavía tenían mucho peso los sectores de la oligarquía terrateniente y en el que influía grandemente la alianza con las capas medias rurales de la España cen-

tral -- no experimentó una necesidad urgente de formar cuadros técnicos ni de racionalizar los mecnismos administrativos y se contentó con una Universidad rígida y minoritaria, dominada por la Iglesia y la Falange. Esta última se encargaba del control político-represivo de los estudiantes a través del sindicato fascista único y obligatorio, el S.E.U.

A partir de la década de los cincuenta la situación -- como hemos visto -- empezó a cambiar y, en consecuencia, llovieron nuevas exigencias sobre el pesado aparato universitario. En un primer momento, se intentó satisfacer estas exigencias "liberalizando" el funcionamiento de la Universidad, pero sin modificar sus estructuras: fue la llamada experiencia liberal del ministro Ruiz-Jiménez, que acabó provocando un enfrentamiento entre los falangistas del S.E.U. y los estudiantes y profesores liberales en Madrid y Barcelona (1956-57).

A partir de entonces se inició un movimiento universitario fuertemente antifranquista pero que no superó en ningún momanto los límites de una opción liberal avanzada. Tras la destrucción del S.E.U. el movimiento universitario culminó con la experiencia del Sindicato Democrático de Estudiantes máxima expresión, a su vez, de una política de respuesta liberal e interclasista a un Estado que se presumía aislado y ultraminoritario. La Asamblea del convento de los Capuchinos de Sarrià (Barcelona), celebrada en marzo de 1966, fue el punto más alto de la acción del Sindicato Democrático, pero al mismo tiempo fue el comienzo de su decadencia irremediable por el juego conjunto de dos factores: la represión (que se abatía fácilmente sobre un movimiento abierto y vulnerable) y el cambio de táctica del propio bloque dominante que empezó a presionar para que el Estado adoptase una política más flexible y crease una Universidad más adaptada a las exigencias de la nueva fase de acumulación monopolista.

La reforma universitaria con la sustitución del ministro Lora Tamayo por Villar Palasí y auspiciada por el Opus Dei iba a culminar con la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Educación de 1970, bajo la protección de la fuerza armada.

Pero lo cierto es que la acción conjunta de la represión y del reformismo opusdeísta sumió a los estudiantes en la desorientación.

Tras el fracaso del Sindicato Democrático algunos grupos reaccionaron exasperadamente con posiciones extremistas e idealistas; otros siguieron insistiendo en la vía muerta del Sindicato Democrático. La mayoría entraron en una fase de estancamiento.

Hasta el curso 1968-69 no se inició un cambio de táctica que permitió superar el estancamiento. En parte bajo la influencia de los hechos de mayo en Francia, y en parte por la comprensión política del cambio estratégico impuesto por el bloque dominante, surgió en la Universidad de Barcelona un nuevo movimiento, la Unión de Estudiantes Revolucionarios (U.E.R.) que buscó un nuevo tipo de respuesta. Esta consistió no tanto en propugnar la inserción liberal en un Estado fascista aislado sino en enfrentarse directamente con este Estado a nivel asequible para la mayoría de los estudiantes. Se trababa, en definitiva, de aislar los eslabones más débiles del Estado, allí donde los estudiantes estaban en contacto directo con él, es decir, en la propia Universidad. Y no con ánimo de reforma liberal de ésta, sino con ánimo de ruptura con uno de los principales aparatos ideológicos del Estado. La impugnación de ca-

tedráticos, la ocupación de cátedras, la no aceptación de las autoridades académicas, la denuncia abierta de los valores ideológicos del sistema y de los hombres que los difundían y encarnaban eran otros tantos aspectos de este enfrentamiento directo con el Estado.

Un movimiento de estas características no podía ni debía tener una organización parlamentaria como la del Sindicato Democrático. Los Comités de Acción eran más informales pero mucho más ágiles y menos burocráticos. Permitían un contacto creador entre la vanguardia y la masa estudiantil y ofrecían menos blanco a la represión.

Frente a esta línea los grupos vanguardistas del grupo P.C. Internaciobal pretendieron forzar la situación con acciones minoritarias de tipo violento, como el asalto al Rectorado de la Universidad de Barcelona, en enero de 1969. Esta acción extremista precipitó la represión y dejó el terreno libre para que el revisionismo volviese a levantar cabeza y para que frente a él resurgiese un extremismo infantil, cada vez más verbalista y aislado, como el de los Comités de Huelga Estudiantil (C.H.E.) que pretendían nada menos que abolir la Universidad sin antes abolir el Estado.

A mediados del curso 1969-70 resurgió el movimiento universitario, no sin una fuerte dosis de confusión, centrando la lucha contra la presencia de la policía en las Facultades. Pero esta lucha se libró -- y se libra -- en un contexto súmamente complicado, pues mientras el bloque dominante intenta imponer la reforma tecnocrática de la Universidad bajo la protección de la policía, algunos de los sectores más tradicionales de la Universidad se oponen a ella en nombre de criterios retrógrados. Esto obliga al movimiento unviersitario a actuar con gran agilidad para aprovechar todas las contradicciones creadas por la reforma en curso. Y para ello necesita formas organizativas igualmente ágiles y operativas, que le permitan incidir con fuerza en los puntos más débiles del sistema, sin perder de vista que el combate político en la Universidad se libra en el terreno de las capas medias y pequeño-burguesas. La gran aportación política del movimiento universitario no debe residir tanto en su fusión directa con el movimiento obrero sino en la convergencia política con éste, frustrando la alianza política del bloque dominante con las capas medias, tarea que no se termina en un curso ni en unos años sino que es permanente a lo largo del proceso revolucionario español.

### c) Los intelectuales

La expansión monopolista y el estallido espontáneo del movimiento obrero provocaron también una desorientación profunda entre los llamados intelectuales progresistas o comprometidos.

Hasta la década de los sesenta estos intelectuales habían cultuvado una actitud "resistencialista" que se basaba en una falsa apreciación de la naturaleza del Estado franquista. En en fondo del resistencialismo había la idea de un Estado en descomposición que sólo se mantenía por el peso de la represión y que no tardaría en saltar en pedazos por la acción conjunta de todas las clases y capas lesionadas, encabezadas por el proletariado. La cultura de oposición se nutría, pues, de denuncias de la dictadura y de reivindicaciones democrático-liberales.

Los acontecimientos de 1962 revelaron brutalmente a los intelectuales

una doble realidad: por un lado, comprobaron que el Estado franquista podía protagonizar una política de expansión monopolista (cosa que, por lo demás, no había dejado de hacer desde el primer momento); por otro lado, , vieron que el estallido del movimiento obrero se producía completamente al mergen de ellos, sin posibilidades inmediatas de conexión. Aunque los intelectuales más destacados intentaron establecer esta conexión con una inserción más política en la lucha (como las cartas de protesta por las torturas de que eran objeto los mineros asturianos o el a poyo declarado a los estudiantes del Sindicato Democrático), pronto comprobaron que esta inserción era insuficiente porque apenas era reconocida como tal por los únicos destinatarios que le podían dar sentido: los obreros. En cambio, les exponía a una represión por parte del régimen, que no encontraba compensación alguna en el terreno inmediatamente político.

La mayoría optaron por refugiarse entonces en una oposición de tipo cultural que les situaba directamente en el terreno escogido por el Estado y en el que eran particularmente vulnerables por su aislamiento.

El abandono de unas posiciones resistencialistas desfasadas dió lugar, como es natural, a una profunda desorientación. Cada cual buscó pie como pudo: en el formalismo literario, en el humor negro, en el marxismo "humanista", en el populismo. Muchos descubrieron entonces las virtudes del desarrollismo y de la sociología estructuralista -funcionalista. Otros abandonaron pura y simplemente el terreno.

En Cataluña, el fenómeno revistió características particulares pues coincidió con el aludido movimiento de exasperación de la pequeña burguesía. Los intelectuales catalanes encontraron en el cultivo de las letras catalanas una base social, un público (pequeño burgués, esencialmente) que no tenían o no tenían apenas los intelectuales de allende el Ebro y con el que podían establecer un contacto bastante directo. Además, las prohibiciones políticas y administrativas que pesaban sobre el desarrollo de la cultura catalana (que tanto frenaban y frenan la consolidación de la alianza del bloque dominante con las nuevas capas medias urbanas) daban a la inserción en esa actividad cultural un contenido oposicionista, resistencialista que enlazaba con el resistencialismo anterior y daba una cierta ilusión de continuidad.

Esto explica el boom editorial, el desarrollo espectacular de la Nova Cançó y el fomento de actitudes comunitaristas. Políticamente, la ilusión resistencialista anduvo muy ligada al desarrollo del movimiento universitario y tuvo su culminación en la ya citada Asamblea de los Capuchinos de Sarrià, de 1966, cuando los intelectuales llegaron a protagonizar una actividad política casi autónoma en forma de manifestaciones de calle, junto a sectores pequeñoburgueses.

A partir de entonces, se inidió el descenso y la progresiva ruptura del comunitarismo. Pero de eso se hablará más adelante.

### d) La Iglesia

El cambio de situación afectó, naturalmente, a la Iglesia, uno de los pilares ideológicos y políticos del Estado franquista, como vimos.

La aparición de fenómenos contestatarios en el seno de la Iglesia (visible, por ejemplo, en hechos como la carta de los 369 sacerdotes vascos contra los métodos de la policía, en 1961; la ayuda prestada por capuchinos y jesuitas al movimiento universitario y la participación de sacerdotes en los mo-

vimientos nacionalistas vasco y catalán) tiene, sin embargo, un carácter ambiguo.

Por un lado, es un signo evidente de comienzo de ruptura de la rigidez disciplinaria. La Iglesia, sólidamente estructurada en una jerarquía dura y bien articulada, había sido puesta por sus dirigentes al servicio político e ideológico del Estado franquista. Su tarea específica era el control de los aparatos ideológicos, en división de funciones con la Falange.

La Iglesia cumplió su función sin demasiados problemas, hasta que el bloque dominante empezó a exigir no ya la difusión única de los viejos valores tradicionales -- los únicos que manejaba la Iglesia española -- sino también, y preferentemente, la difusión de valores nuevos, tecnocráticos y desarrollistas con vistas a la alianza con las capas medias urbanas. La Iglesia no estaba en condiciones de cumplir esta función, por lo menos de modo inmediato.

Las reformas de Juan XXIII y de Pablo VI, sus encíclicas y el Concilio Vaticano II estaban destinados, precisamente, a poner a la Iglesia en condiciones de asumir su papel ideológico en las nuevas condiciones sin perder la hegemonía. La Iglesia española, como es sabido, se adaptó mal a las reformas y su jerarquía superior resultó prácticamente incapaz de dar a todo el aparato eclesiástico el cambio que se le exigía.

Para imponer este cambio era indispensable, pues, impugnar la jerarquía, romper la disciplina interior, sin llevar la ruptura a límites incompatibles con el funcionamiento general del aparato. De ahí que cuando los sacerdotes contestatarios impugnaban la jerarquía en nombre del espíritu conciliar fuese extremadamente difícil saber cuál era su objetivo político real (consciente o inconsciente).

En muchos casos, esta impugnación no era más que la exigencia de adaptar la Iglesia a las nuevas tareas políticas e ideológicas que le asignaba el bloque dominante en pleno proceso de expansión monopolista.

Sólo en contados casos la impugnación se debía a una opción clara e inequívoca de ruptura no ya con el franquismo sino con el sistema capitalista. Y estos contados casos se veían todavía más reducidos porque la mayoría de las veces se presentaban en un ropaje nacionalista que acababa por confundir totalmente las cosas.

Lo mismo cabe decir de los movimientos propiciados por la Iglesia en el seno de la clase obrera, como la H.O.A.C. y la J.O.C. Políticamente hablando, estos movimientos no iban más allá de una alternativa liberal al sindicalismo vertical. Se encerraban conscientemente en el sindicalismo reformista y en el mejor de los casos llegaban a coincidir con un PC cada vez más lanzado por la vía del reformismo.

## 6. DE LA CRISIS DE 1966-67 A LA ACTUALIDAD

### a) Reactivación del Movimiento obrero y reconstrucción de Comisiones Obreras sobre bases más sólidas.

La expansión monopolista siguió adelante, aunque con graves contradicciones. Ya vimos que los mecanismos políticos del bloque dominante no estaban -- ni están -- bien ajustados y que su alianza con las capas medias padecía por la rigidez del aparato de Estado, que le impide reabsorber, por ejemplo, el pro-

blema nacionalista.

Por otro lado, la neutralización política del proletariado, objetivo supremo del bloque dominante, quedaba mal asegurada, como había demostrado claramente el estallido de 1962 y la aparición subsiguiente de Comisiones Obreras.

En el seno del bloque dominante aparecieron los primeros intentos de controlar a la clase obrera por medio de mecanismos integradores, pasando la represión directa a un segundo plano.Tal era el sentido de hechos como la oferta de fondos a C.O. por parte de instituciones financieras catalanas o la propuesta de hombres representativos de la burguesía catalana de entenderse directamente con C.O.

Pero las apremiantes necesidades de acumulación de capital con vistas a la integración en el Mercado Común, y el comienzo de la crisis de 1966-67 inclinaron la balanza en favor de los que sostenían que el mejor control del movimiento obrero seguía siendo la represión pura y simple. Como vimos ya, estas contradicciones del bloque dominante se resolvieron en el plano político con el compromiso de la Ley Orgánica de 1967, avalada por la farsa del referendum del 14 de diciembre de 1966 que fortalecía la posición personal de Franco frente a la oposición y en relación con el bloque dominante.

Premisa esencial para el éxito del compromiso era la liquidación de las bases organizativas autónomas de la clase obrera. Ya vimos que tras las elecciones sindicales de septiembre-octubre de 1966, C.O.se había convertido casi en un sindicato paralegal, casi un verdadero contrasindicato, por lo menos en algunos puntos del país, como Madrid.

El 27 de octubre de 1967, estas C.O. paralegales hicieron una demostración de fuerza política con la llamada "Jornada Nacional" lanzada por las C.O. de Madrid. Pero esta misma demostración, limitada por el planteamiento de unos dirigentes que pensaban más en términos de "movimiento" antifranquista que en términos de "organización autónoma" de la clase obrera, señaló el comienzo de la decadencia de C.O., tal como habían sido concebidas hasta entonces.

Efectivamente, el régimen desencadenó una ofensiva generalizada (encarcelamiento de dirigentes, destitución de los enlaces y jurados más significados, despido en masa de trabajadores, etc.) contra la cual C.O. no estaba en condiciones de defenderse. Para estabilizar el compromiso político de la Ley Orgánica y superar la crisis económica sin disminuir el ritmo de acumulación, el bloque dominante forzó la represión en todos los terrenos y se propuso, como objetivo fundamental, el desmantelamiento de C.O.La respuesta de éstas fue totalmente inadecuada , pues sin comprender el cambio de la situación siguieron practicando una línea de"movimiento" abierto, de asambleas, de manifestaciones que exponía todavía más a los obreros a los golpes de la represión, sin la contrapartida de una movilización masiva de la clase obrera.

En 1967, todavía estallaron algunas grandes huelgas, como la de Laminados de Bandas en Frío de Echévarri, que demostraban las enormes posibilidades de lucha de la clase obrera y sus espléndidas reservas de combatividad. Pero tras una acción realmente heroica que se prolongó durante meses, y en la hubo valiosos rasgos de solidaridad, la huelga fue reprimida por el Estado sin repercusiones notables en el avance organizativo del movimiento obrero.

En el terreno económico, la represión se tradujo en una serie de medidas estabilizadoras que iban destinadas a cargar sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la crisis. Se congelaron los salarios, se restringieron los

créditos, se procedió a una nueva devaluación de la peseta (1967), se limitó el consumo de las masas populares, etc. Hubo despidos en masa y se hizo frecuente el espectáculo de largas colas de obreros que buscaban trabajo.

Con ello la burguesía quería ahondar todavía más la diferencia entre el aumento de la productividad y el aumento de los salarios. Entre 1964 y 1966, los años de mayor expansión, el índice de aumento anual de la productividad había sido del 6'9% y el de los salarios reales del 4'6%. Esto solo basta para demostrar la falacia del argumento tradicional de que no se pueden aumentar los salarios sino aumenta la productividad del trabajo. En definitiva, la burguesía tomaba sus medidas para superar la crisis acrecentando los ritmos de acumulación y de extracción de plusvalía.

El P.C., interpretando mal los términos del compromiso de la Ley Orgánica, creyó ver en la acentuación de la represión una profunda brecha entre los sectores "ultras" y "evolucionistas" del bloque dominante y preconizó la alianza con estos últimos para aislar a los primeros. Era no comprender que la represión era, precisamente (como se volvería a demostrar con más rigor durante el estado de excepción), una de las cláusulas esenciales del compromiso: los pretendidos "evolucionistas" dejaban que los "ultras" limpiasen el terreno para afrontar en mejores condiciones la adaptación del aparato estatal a sus crecientes necesidades acumulativas.

Políticamente esto se tradujo en la creación de unas Comisiones Cívicas interclasistas que tenían que agrupar a todos los sectores antifranquistas bajo reivindicaciones democrático-liberales. El movimiento de Comisiones Obreras se integró tácticamente en el de Comisiones Cívicas y acabó yendo -- fuesen cuales fuesen las intenciones -- a remolque de éste. Las actividades cada vez más "democráticas" y abiertas de Comisiones Cívicas y Comisiones Obreras permitieron la acción represiva del franquismo que al sumarse a la anterior detención de dirigentes obreros, acabó por desarticular a C.O. en puntos tan importantes como en Madrid. Fue entonces cuando surgió en algunas grandes empresas madrileñas, como Pegaso y Standard una oposición en el seno de C.O. que llegó incluso a organizar algunas acciones al margen de la dirección formal de éstas.

La importancia de C.O. y la respuesta reformista del P.C. dejaron libre el espacio político para la aparición de una serie de posiciones izquierdistas que pretendían llenar dicho espacio con verbalismos y vanguardismos gratuitos.

A ello contribuyó, sin duda, la crisis del movimiento comunista mundial, tal como se concebía tradicionalmente. La China Popular encabezó la lucha contra el revisionismo soviético y aportó nuevos elementos que había que elaborar teóricamente en función de cada situación concreta. De golpe desaparecieron los viejos centros de referencia y surgieron muchas corrientes centrífugas que buscaban la solución en el "humanismo" marxista, en el "policentrismo", en el sociologismo vulgar, etc. Por su parte, la transposición mecánica de la experiencia china a las condiciones de nuestro país dió nacimiento a los movimientos m-l (marxistas-leninistas) que por su dogmatismo acabaron convertidos en sectas inoperantes sin proyección alguna en las masas (con la leve excepción de algunos grupos universitarios en Madrid).

En 1967, surgió en Barcelona el grupo "Unidad", escindido del <u>Partido Socialista Unificado de Cataluña</u> (sección catalana del P.C.). La escisión se justificó teóricamente con una fuerte crítica del revisionismo carrillista y con una afirmación radical de continuidad respecto a la línea anterior del P.C.

de la que, según "Unidad", Santiago Carrillo se había desviado.Los escindidos se proclamaban, pues, de entrada, como el verdadero partido de la clase obrera.

Este vanguardismo triunfalista, en el que se teorizaban las propias limitaciones del grupo, evolucionó pronto hasta un ultraleninismo de factura trotskista. Consecuente con su planteamiento inicial, el grupo se convirtió en Partido Comunista (Internacional). Una ulterior escisión, la del P.C. Internacionalista (o "Ista", como se le conoce corrientemente) acabó de aislar al grupo, cuyas referencias al marxismo-leninismo y al maoísmo eran cada vez más retóricas y desligadas de la práctica cotidiana de las masas. Ni los "internacionales" ni los "istas" han hecho jamás un correcto análisis de la sociedad española; para ellos lo primordial es construir el partido, pero al margen de la lucha de las masas, al margen de Comisiones Obreras. De ahí que hayan caído en una práctica errónea, aventurera. Y sólo en la medida en que alguno de sus militantes no se marginan de la lucha de masas llegan a entender los problemas tácticos que plantea la lucha por la democracia, contra el fascismo.

La crisis afectó también a las Organizaciones Frente, que entraron prácticamente en barrena. En Cataluña, por ejemplo, el F.O.C. intentó aprovechar la desorientación de Comisiones Obreras para desplazar el P.S.U.C. de la dirección de las mismas. Así llegó a conquistar la mayoría "parlamentaria" en algunas reuniones de la Local de Barcelona. Pero siempre practicó el reformismo más absoluto y fue totalmente incapaz de proponer una línea política de masas coherente.

El P.C. Internacional quiso superar el "sindicalismo" reformista de C.O. con la creación de las llamadas Comisiones Obreras Revolucionarias (C.O.R.), concebidas como embriones de un contrapoder obrero y como órganos dirigentes del proceso revolucionario (es decir, de la toma del poder) del proletariado. Por su carácter de organización insurreccional, las C.O.R. se confundían con las células del propio P.C. (I) y se marginaban completamente de la lucha en las empresas.

Por su parte, los elementos más jóvenes del F.O.C. impulsaron las llamadas Comisiones Obreras Juveniles (C.O.J.) que intentaron dar a la táctica general de C.O. una proyección agitatoria a nivel general. Esta agitación se traducía en formas de acción violentas, con enfrentamiento directo en la calle contra el aparato represivo. Pero esta agitación se hacía sin ninguna preparación de masas, sin la más mínima formación política. Era una acción directa, elemental, que contenía en si misma el germen de su propia disolución, pues llevaba a sus últimas consecuencias una táctica como la de C.O que se basaba más en la movilización a nivel de "calle" que en la organización a nivel de"empresa". Las C.O.J., que sirvieron de plataforma a muchos jóvenes católicos faltos de la más mínima formación política, se hundieron el mismo año de su aparición (1968), dejando el terreno libre para una reacción de tipo sindicalista y apolítico.

El eclecticismo del F.O.C., verdadero ejemplo de práctica socialdemócrata bajo una capa de verbalismo izquierdista, aceleró su hundimiento, hasta que estalló finalmente en varias fracciones. Entre ellas cabe citar la del grupo sindicalista "Qué hacer", que ve su principal adversario en los grupos políticos y encarna el espíritu del economicismo, y el grupo trotskista de la revista "Comunismo" conocido también con el pintoreco nombre de "Termita Roja", por el título de una de sus publicaciones.

En estas condiciones, puede decirse que a partir de 1968 se inició una

nueva etapa del movimiento obrero. La acción tuvo ritmos diferentes en las distintas zonas del país y no alcanzó una cierta amplitud hasta 1969-70. En la mayoría de los casos se desarrolló al margen del aparato de C.O., en la medida en que subsistía, y de las pretendidas "vanguardias". En algunos puntos, en cambio, el aparato de C.O. fue capaz de impulsar nuevamente la lucha. En todo caso el problema de la organización volvió a plantearse con fuerza, y puede decirse que sólo allí donde se ha conseguido un cierto grado de organización la lucha ha alcanzado un nivel apreciable.

En Asturias, la formación del consorcio minero HUNOSA (verdadera operación de socialización de pérdidas, como ha reconocido recientemente el director del I.N.I. Claudio Boada, al afirmar que todos los españoles deben cargar con el déficit de la compañía) marcó el comienzo de un movimiento huelguístico que, con intermitencias, se ha prolongado hasta hoy, llegando en algunos momentos a paralizar casi completamente la cuenca minera.

En Sevilla se iniciaron también una serie de movimientos huelguísticos (como el de HYTASA y el de "Construcciones Aeronáuticas") que se prolongaron al campo (La Rinconada) y que, desde entonces, se han reproducido con intermitencias hasta convertir la zona sevillana en uno de los puntos más avanzados del movimiento obrero español.

En Cataluña, las acciones se localizaron sobre todo en el Bajo Llobregat y en el Vallés. En general, las más importantes o las más ricas en enseñanzas políticas (como la de "Blansol", por ejemplo) se hicieron al margen de la línea oficial de la Local de C.O. Al mismo tiempo surgieron otros focos huelguísticos en diferentes puntos del país, siendo un rasgo muy notable la transformación de antiguos centros agrarios como Pamplona y Valladolid, en nuevos centros industriales con una clase obrera nueva y combativa.

El crecimiento de este movimiento obrero coincidió con la radicalización política de algunos sectores de la pequeña burguesía (manifestada, por ejemplo, en el auge de la actividad violenta de la E.T.A. en el País Vasco) exasperados por la crisis económica y con la desorientación en que se hallaba sumido el movimiento universitario, que permitió a algunos grupos izquierdistas intentar salidas de tipo violento (como el citado asalto de la Universidad de Barcelona en enero de 1969).

Frente a esta convergencia de luchas, el bloque dominante comprendió que el compromiso de la Ley Orgánica peligraba y que era necesario reforzarlo con un mayor grado de institucionalización. Para ello necesitaba frenar las luchas populares y asegurarse un margen más amplio de maniobra, conjugando algunas concesiones con un endurecimiento de la represión.

El Estado anunció, pues, la descongelación de salarios para 1969 (aunque de hecho se limitó a fijar el nuevo tope de aumento en un 5'9%) y, al mismo tiempo, el restablecimiento de la Ley de Bandidaje y Terrorismo, y la declaración del estado de excepción, primero en el País Vasco y después en toda España (enero de 1969).

La represión afectó a C.O. y precipitó la crisis de su aparato formal, así como la de las pretendidas vanguardias obreras, pero no detuvo el crecimiento del movimiento obrero. Este se desarrolló en torno a la renovación de los convenios colectivos y desbordó (en algunos casos ampliamente) los topes salariales fijados por el Estado. Aunque la lucha obrera se desarrolló en la mayoría de los casos de modo espontáneo, alcanzó sus mejores resultados allí donde

existía una fuerte organización de C.O. por empresas. Baste citar el caso de A.E.G. de Terrassa, donde los obreros consiguieron un 19% de aumento y el de la SIEMENS de Cornellà, donde obtuvieron un 14%.

Durante el estado de excepción la lucha obrera se desarrolló en Asturias y en el País Vasco (Altos Hornos, Babcock Wilcox, Naval, Orbegozo, Michelin) y dió lugar, en algunos sitios, a la aparición de formas renovadas de organización autónoma de la clase obrera, como los "Comités de Empresa", que prefiguraban el camino de la reconstrucción efectiva de las Comisiones Obreras.

En el verano de 1969, tras el estado de excepción, el bloque dominante consideró suficientemente despejado el terreno como para avanzar un poco más en el proceso de consolidación del compromiso de la Ley Orgánica (así hay que entender la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco en julio de 1969).

Pero el hecho de que las luchas obreras continuasen y de que poco a poco apareciesen nuevos embriones de reconstrucción de C.O. y de formación de vanguardias políticas más sólidas, acentuó la inquietud del bloque dominante y se hizo más patente la gravedad del círculo vicioso en que se movía y mueve en relación con la forma actual de su Estado. Las disensiones entre Falange y el Opus Dei y la subida al poder de éste como partido casi único a finales de 1969 muestran que el bloque dominante quiere romper dicho círculo vicioso con compresas y remedios de fortuna por temor a las consecuencias incalculables de una operación más audaz.

Hoy, el movimiento obrero se encuentra en una fase de expansión y radicalización. La reconstrucción de C.O. se hace a partir de los mejores militantes comunistas enfrentados con el revisionismo y el espontáneismo, sobre la base de una lucha en las empresas cuyos puntos más salientes son Asturias, Super Ser, Orbegozo, ENASA, La Maquinista, Philips, Authi, Astra, los viticultores y los trabajadores de la construcción de Sevilla y Granada, el Ramo del Agua de Barcelona, la A.E.G. de Terrassa, la Banca en todo el país, los transportes públicos de Sevilla, Palma de Mallorca, Gijón y Madrid (el Metro), los obreros de la construcción de Madrid, Sevilla, Terrassa, etc.

La fusión del movimiento obrero con el movimiento popular en los barrios ha dado, por su parte, ejemplos de lucha tan elevados como el de Erandio. Casos como éste y como el de Granada revelan no sólo las potencialidades del movimiento obrero y popular sino también la limitación del margen de maniobra del Estado que, por su rigidez, convierte la reivindicación económica en inmediatamente política y acentúa su propio desfase respecto a las necesidades del bloque dominante.

b) Inestabilidad política e ideológica de la pequeña burguesía y las nuevas capas medias

La crisis de 1966-67, la aceleración del proceso de acumulación monopolista y de integración en el capitalismo internacional, y la nueva explosión espontánea del movimiento obrero han acentuado la inestabilidad política e ideológica de estos sectores intermedios.

La pequeña burguesía tradicional se vió seriamente afectada por la crisis y por la aceleración de la acumulación monopolista pero no supo encontrar ninguna salida política a la situación. Mientras en el País Vasco esto se traducía en una exacerbación de las acciones violentas por parte de la E.T.A., en

Cataluña provocaba el estancamiento del impulso nacionalista de comienzos de la década del sesenta.

En efecto, el nacionalismo se reveló totalmente incapaz de dar una perspectiva coherente a la pequeña burguesía e incluso retrocedió en la pugna con el tecnocratismo europeísta por la conquista de las nuevas capas medias urbanas. El impulso cultural catalán empezó a resquebrajarse, muchos protagonistas de la Nova Cançó se refugiaron en actitudes comercialistas o escapistas y en la literatura aparecieron claras rupturas con el ilusorio comunitarismo anterior. Pero estas rupturas no se tradujeron tampoco en una alternativa válida, porque no se proyectaban sobre ningún sector social concreto. De ahí las actitudes idealistas, el elitismo, el falso universalismo y, en definitiva, el espíritu de clan aislado que caracteriza desde entonces a una buena parte de la producción cultural catalana, sin otra contrapartida que la insistencia en una cultura localista y resistencialista de pocos vuelos, por parte de los intelectuales tradicionales.

La crisis del nacionalismo agudizó la desorientación de las nuevas capas medias urbanas que no encontraban ningún elemento político e ideológico coesionador.

Aquí es, por otra parte, donde se hizo más patente el desfase entre las necesidades políticas del bloque dominante y la rigidez del Estado franquista. En efecto, éste último actúa tanto en función de los esquemas del primer período de acumulación de los años cuarenta, que apenas sabe operar como canal de difusión de los nuevos valores tecnocráticos y desarrollistas del bloque dominante. La Escuela, la Universidad, la Iglesia, el sindicato vertical son otros tantos aparatos ideológicos que por su rigidez y mal funcionamiento impiden al bloque dominante cimentar una alianza sólida con las capas medias urbanas.

Por ejemplo, el centralismo a ultranza y la ideología nacionalista -imperialista que todavía cultivan los aparatos del estado impiden al bloque dominante neutralizar al nacionalismo periférico y recuperar su base social.

En la medida que la pequeña burguesía y las nuevas capas medias urbanas se debaten en su propia inestabilidad social e ideológica, en que su alianza con el bloque dominante es dificultada por la rigidez del propio Estado, y en que el movimiento obrero no es capaz de ofrecer una perspectiva revolucionaria global y coherente, estos sectores intermedios no encuentran otra salida, a corto plazo, que un nacionalismo exacerbado y violento, minoritario en general, pero muy activo. La importancia político-estratégica de este nacionalismo es que dificulta todavía más la cimentación de la alianza del bloque dominante con las capas medias urbanas y acentúa la contradicción entre el bloque dominante y su Estado. Pero si este nacionalismo resulta incapaz (y es lo más probable) de dar a su radicalismo una salida a largo plazo (y sólo puede hacerlo en la medida que deje de ser nacionalista y enlace con el movimiento obrero, es decir, en la medida que deje de ser una opción interclasista), acabará produciendo el efecto contrario: las nuevas capas medias urbanas no le seguirán en su radicalización y quedarán disponibles para su absorción política e ideológica por el bloque dominante, en la medida en que éste agilice su Estado y sus canales de comunicación con él.

De ahí la enorme importancia política que un justo enfoque de los problemas nacionales tiene para el movimiento obrero en la batalla por la ampliación del movimiento popular y por la ruptura de las alianzas del bloque dominante.

c) Evolución de la Iglesia hacia el desarrollismo

Por su parte, la Iglesia ha dado pasos tímidos pero inequívocos en el sentido más arriba apuntado. El Vaticano ha marcado algunas distancias respecto al Estado franquista, aunque sin llevar el distanciamiento a un punto de excesiva tensión. Dentro de la jerarquía superior se han insertado hombres más dúctiles, como el nuevo primado de Toledo, Vicente Tarancón, e incluso claramente identificados con la difusión de los nuevos valores desarrollistas como los obispos Añoveros y Cirarda. Pero la jerarquía tradicional sigue ofreciendo una seria resistencia. En la medida en que esta última es un factor de inmovilismo agrava las tensiones en el seno de la Iglesia, radicaliza a sus cuadros inferiores y medios y a una buena parte de los fieles. Pero esta radicalización no es todavía unívoca y ofrece muchos elementos de confusión.

Hasta ahora, lo más claro es, al respecto, la convergencia de esta radicalización con la política del revisionismo en el movimiento obrero. La ayuda prestada por ciertos sectores eclesiásticos al movimiento obrero y al movimiento universitario se sitúa, generalmente, en un plano de transformación democrático-liberal del país. Las posturas más radicales se han confundido, en el mejor de los casos, con la exacerbación del nacionalismo pequeño burgués, como en el País Vasco y Cataluña.

En general, la contestación en el seno de la Iglesia española no va más allá, salvo en algunos casos particulares, tanto más notables cuanto que aislados, de dicha perspectiva democrático-liberal, que es la que mejor puede adaptar al aparato de la Iglesia a las nuevas exigencias del bloque dominante, pues la radicalización no modifica apenas las estructuras jerárquicas de la Iglesia y deja, con ello, el terreno libre para que una jerarquía más dúctil recupere todas las impugnaciones.

Por otro lado, en la medida en que este reformismo democrático-liberal choca con la rigidez del Estado franquista -- como ha ocurrido últimamente en Granada -- puede superar sus ambigüedades y vincularse más estrechamente al movimiento obrero revolucionario. Pero también puede llevarle a posturas extremistas que la aislen todavía más de éste y faciliten, a la larga, su propia recuperación por la jerarquía.

## 7. LA TAREA DE LOS COMUNISTAS EN LA ACTUALIDAD

El análisis de los treinta años de lucha de clases bajo el franquismo ha mostrado la tarea que los comunistas asumieron en el curso de la misma. En un primer momento y tras la sistemática y despiadada destrucción y aniquilación de las organizaciones políticas y de masas del movimiento obrero y popular, lo prioritario era su reconstrucción inmediata sobre bases reivindicativas y de movilización mínimas. Mientras, la lucha política adquiría un objetivo de lucha antifranquista puesto que posee un carácter abiertamente revolucionario de lucha contra el Estado, que facilita los intrumentos político-organizativos y de represión que se proponen simplemente exterminar al movimiento obrero. Y en eso el franquismo no ha debilitado sus posiciones; hoy como ayer el régimen se propone, sin más, destruir al movimiento obrero y popular.

En esta lucha antifranquista han intervenido los mejores militantes co-

munistas y ha sido siempre preconizado por la dirección del PCE-PSUC,sin embargo en su planteamiento han surgido incorrectas apreciaciones sobre el carácter del franquismo y desviaciones revisionistas en cuanto a los métodos de trabajo, formas de lucha y carácter de las contradicciones en el seno del bloque dominante. Esto revierte contínuamente sobre el movimiento obrero y popular dejándolo sin la debida preparación ante la iniciativa política de la oligarquía. Por otra parte, esta falsa apreciación del análisis de clase del país se ha traducido en una incapacidad política para dirigir correctamente la lucha de la clase obrera y del pueblo contra el franquismo y por la revolución popular.

En base a esta incapacidad y a que en estos momentos el PCE-PSUC no ofrece ninguna garantía para asegurar la organización de las masas y menos aun la autonomía política e ideológica de la clase obrera, todos los comunistas hemos de combatir por la reconstrucción del movimiento comunista en España y por construir nuevamente el partido comunista.

Si bien esta tarea es ahora fundamental y primordial, el movimiento comunista no debe despreciar el trabajo de masas, único que puede garantizar una justa reconstrucción de la organización comunista. En estos momentos estamos asistiendo en todo el país -- en sus frentes de lucha principales -- a una verdadera reconstrucción del movimiento obrero sobre bases políticamente correctas: creación de organizaciones de masas para la lucha, construidas a partir de la empresa o fábrica, que se movilizan por reivindicaciones inmediatas y que participan en la lucha política de masas por unas libertades democráticas elementales, en la medida que su propia organización --la comisión-- no posee el más elemental derecho de asociación y de reunión. Por eso se impone, ahora más que nunca, reconstruir la organización de los comunistas. No basta con que los militantes comunistas dirijan el trabajo de masas e impulsen sus organizaciones, es necesario además poseer un partido comunista para dirigir las acciones de las masas en su lucha antifranquista y por la revolución democrático-popular.

Los comunistas no oponen la lucha antifranquista a la lucha por la revolución democrático-popular sino que consideran la primera indispensable para alcanzar la segunda. En la lucha antifranquista lo que se debate es la conquista de las libertades democráticas más elementales y en el transcurso de esta lucha, la clase obrera y sus aliados --las masas populares-- construyen sus propias organizaciones al tiempo que avanzan en la lucha ideológica. En la lucha por la libertad y la democracia se forjan y se consolidan las organizaciones del movimiento obrero y popular, y sólo en este sentido los comunistas conceden a esta lucha un claro carácter revolucionario, puesto que es fundamental para extender y agudizar la lucha de clases en España. Hoy, en la lucha antifranquista está empeñado todo el pueblo, todas las clases populares a las que el franquismo lesiona económica y políticamente. Los comunistas comprenden que de la lucha contra el franquismo depende, en definitiva, la reconstrucción del movimiento comunista y, muy especialmente, la reconstrucción del nuevo partido comunista que es ahora la tarea más urgente con la que nos enfrentamos.

Los comunistas luchamos por consolidar las organizaciones de masas de la clase obrera (COOO), las organizaciones de barrio, las organizaciones del movimiento popular y por construir nuestra propia organización sobre las bases del para derrocar el franquismo e implantar la revolución democrático-popular. marxismo-leninismo La lucha antifranquista no es una etapa de esta revolución sino más bien el primer paso hacia la república popular, pues lo que imprime carácter a la revolución no es sólo la destrucción de su Estado --objetivo tácti-

co y por tanto contradicción en primer plano para todo militante revolucionario-- , sino la del bloque dominante de las fuerzas de clase que dirigen y dominan la formación social española. En la decidida destrucción del Estado fascista sólo están interesados la clase obrera y el movimiento popular, aunque tácticamente, incluso, algunas fracciones y grupos sociales de la oligarquís dominante participan en la eliminación de las formas fascistas del Estado; por eso, lo que determina el carácter de la revolución democrático-popular es el derrocamiento de la vieja formación social y, en primer lugar, de su Estado. La lucha antifranquista se inserta, pues, dentro de la lucha revolucionaria por la república popular.

El carácter de esta revolución es una exigencia de las condiciones en que se ha desarrollado la lucha de clases en nuestro país tras 30 años de franquismo. Liberar al máximo las fuerzas productivas mediante la reforma agraria y la nacionalización de las principales industrias; llevar a cabo una serie de reivindicaciones que favorezcan las aspiraciones del pueblo e implantar las medidas propias de la revolución democrático-burguesa, son tareas que el actual bloque dominante de la oligarquía financiero-terrateniente-industrial, es incapaz de realizar por su propia composición de clase y correlación de fuerzas. Eso quiere decir que la base de la revolución democrático-popular es hoy proletaria, que el proletariado y el movimiento popular son los encargados de dirigir el proceso revolucionario e instaurar su dictadura democrático-popular y que, por lo tanto, la burguesía en bloque ha perdido su papel revolucionario e histórico en España. Hoy en día, la tarea de la revolución es asumida totalmente por el proletariado, incluso en su aspecto democrático-burgués.

Así, la revolución democrático-popular no es más que la primera fase de la lucha por la revolución socialista y por la construcción del socialismo en España. Sin una perspectiva socialista no hay hoy en España ninguna posibilidad revolucionaria y la lucha por el socialismo en España pasa por la RDP. Pero para llevar a cabo sus tareas revolucionarias la clase obrera y las clases populares necesitan un Estado propio: el Estado democrático-popular, la REPUBLICA POPULAR.